

CONGRESO  
**LAS OTRAS PROTAGONISTAS DE LA TRANSICIÓN:  
IZQUIERDA RADICAL Y MOVILIZACIONES SOCIALES**

SESIÓN/MESA 10

**NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y ESCUELA**

Moderador:

Pedro Oliver

Sábado 25 de febrero de 2017

12:00-14:00

Centro Cultural Maestro Alonso. Salón de Actos  
C/ Maestro Alonso, 6

<https://congresotransicion2017.wordpress.com/>



EL MOVIMIENTO ANTINUCLEAR Y LA IZQUIERDA RADICAL ESPAÑOLA DURANTE LA TRANSICIÓN .....	2
EL MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA. IDENTIDADES Y POSTURAS ANTE LA TRANSICIÓN, 1975-1982 .....	15
EL MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA EN COMBATE COMO BASE PARA LA CRÍTICA A LA TRANSICIÓN .....	27
PEDAGOGÍA EN MOVIMIENTO. LA EDUCACIÓN POPULAR MADRILEÑA .....	39
LA LUCHA DE LA ESCUELA SÓLLER.....	49
LA IZQUIERDA EN LOS MOVIMIENTOS UNIVERSITARIOS .....	62

Joaquín Piñeiro Blanca

## **EL MOVIMIENTO ANTINUCLEAR Y LA IZQUIERDA RADICAL ESPAÑOLA DURANTE LA TRANSICIÓN**

Joaquín PIÑEIRO BLANCA

### **Resumen:**

Este trabajo se propone analizar la evolución del movimiento antinuclear dentro del pacifismo y en relación con la izquierda radical durante la Transición. Los diversos ámbitos del pacifismo y el ecologismo vinculan la oposición a las centrales nucleares con el rechazo al ingreso de España en la OTAN, por ser ambas posturas expresión del antiamericanismo identificable, asimismo, con posiciones contrarias al capitalismo. No obstante, no siempre estuvo presente el carácter anti-sistémico, ya que algunos de estos movimientos también enlazaban con grupos por la paz que no legitimaban el uso de la violencia y que, por tanto, se alejaban de posturas revolucionarias.

**Joaquín Piñeiro Blanca** es profesor titular de universidad, área de Historia Contemporánea, Universidad de Cádiz.

En comparación con la situación en Europa desde el inicio de la Guerra Fría, la sociedad española se incorpora relativamente tarde al movimiento antinuclear. La dictadura de Franco, con un modelo organizativo castrense, en el que se cultivaba el uso de la violencia y la defensa de valores patrióticos mediante las armas no fue, precisamente, un contexto que facilitara este tipo de movimientos, más teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos eran necesariamente anti-franquistas.

Los convenios del Pacto de Madrid firmados por España y EEUU en 1953 permitieron la instalación de bases militares estadounidenses en el país. La dictadura franquista justificó el acuerdo presentándolo como un modelo de mutua ayuda, militar y económica. En realidad EEUU se reservó la iniciativa y el uso unilateral de las instalaciones militares, en las que ejercía la soberanía ya que se regirían por las leyes estadounidenses. Las repercusiones de los acuerdos eran múltiples, entre otras, la posibilidad de que España entrara automáticamente en guerra si USA lo hacía. Aquí, en este vasallaje militar de España a EEUU, está la matriz del movimiento antiamericano que se desarrollará en el desde la década de 1960. Sus propósitos se concentraron inicialmente en la eliminación de las bases militares y las centrales nucleares, y en evitar el ingreso en la OTAN.

### *Movimientos sociales relacionados con el antinuclear*

Desde los movimientos pacifistas y ecologistas el poder de EEUU se observa como una amenaza para la paz mundial, aunque en términos diferentes durante la Guerra Fría (confrontación bélica mundial -probablemente con uso de armamento nuclear- contra la URSS) y tras la desaparición de la Unión Soviética (guerras regionales por intervenciones estadounidenses bajo variados pretextos).

### El movimiento contrario a la existencia de bases militares estadounidenses

En 1963 las bases militares estadounidenses pasaron a ser soberanía española tras la firma de la Declaración Conjunta. Esto supuso para España el reconocimiento como aliado

estratégico, algo que fue confirmado por la construcción del centro de seguimiento de satélites de la NASA y centro de espionaje de Robledo de Chavela (Madrid) y la construcción de la primera central nuclear, en Zorita (Guadalajara).

Más adelante, el ingreso de España en la OTAN introduce una novedad: esta organización sería la que controlaría las bases y no directamente EEUU, aunque este cambio de gestión no es sustancial ya que USA es el principal actor dentro de la OTAN. Es más, supone una situación de mayor ventaja para EEUU debido a que ya no tendría el compromiso de mantener personal e instalaciones porque la subcontrata España lo haría en su lugar. En definitiva, menos coste sin pérdida de control.

USA asentó progresivamente su control militar en España a través, principalmente, de las bases de Torrejón de Ardoz (hoy de uso civil con algunos servicios a la NASA), Zaragoza (ahora en manos de España aunque ofrezca apoyo a las necesidades americanas), Rota y Morón de la frontera (que actualmente son bases militares permanentes de la OTAN).

Los movimientos pacifistas han protagonizado anualmente, intensamente en la primera mitad de la década de 1980, marchas en protesta por la presencia de las bases militares. Algunas provocaron polémicas entre los vecinos de las localidades afectadas, ya que las bases proporcionaban empleos y negocios derivados de su presencia.

### El movimiento anti-OTAN

Las políticas ofensivas del gobierno de Ronald Reagan y la catástrofe de Chernobyl consolidaron las reticencias contra la energía nuclear. Asimismo, el intento de golpe de estado del 23-F estimuló aún más el rechazo al Ejército, expresado, entre otros ámbitos, en el movimiento contrario a la OTAN.

En las encuestas sociológicas de la década de 1980 la opinión pública mostraba una amplia actitud antibelicista y de oposición a la OTAN. Esto obligó a modificar el discurso del poder que tuvo que desterrar la antigua retórica militarista de la dictadura y desarrollar otras más civilistas acerca del papel democrático de las Fuerzas Armadas.

Las movilizaciones contra de la pertenencia de España en la OTAN se iniciaron en 1981 con una marcha organizada por el GANVA (Grup d'Acció Directa No-violenta Anti-OTAN), que tuvo continuidad en los dos siguientes años. Entre 1983 y 1984 se añadieron las

El movimiento antinuclear y la izquierda radical española durante la Transición

acciones de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas a favor de la convocatoria de un referéndum vinculante sobre esta cuestión.

La primera Marcha a Torrejón (1981), convocada por la izquierda radical sin la participación del Partido Comunista de España, se organizó bajo las consignas "OTAN no, bases fuera", y logró congregarse a un número importante de personas. Poco después, el PCE reaccionó encabezando su propia campaña "Bases fuera" que acabó unificándose con la Comisión Anti-OTAN en un organismo unitario: la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP).

A pesar de las divisiones internas, se organizó un movimiento social anticapitalista que forzó al PSOE, primero a no decir la verdad y luego a convocar un referéndum sobre la OTAN. En 1982, el PSOE había obtenido mayoría absoluta para gobernar. En el transcurso de la campaña electoral se había posicionado en contra de la forma en que el Gobierno de UCD había decidido la entrada de España en la OTAN, comprometiéndose a celebrar un referéndum sobre el tema ante la presión social (electoral). El 12 de marzo de 1986 se celebró el controvertido referéndum. Buena parte de los movimientos pacifistas denunciaron que el modo en el que estaba redactada la pregunta encaminaba a los ciudadanos a contestar "sí", que era, en definitiva, lo que recomendaba el Gobierno.

El plebiscito tenía carácter consultivo no vinculante, aunque el entonces presidente Felipe González se comprometió a acatar el resultado. Como es sabido, fue afirmativo a la permanencia debido al apoyo del 52,5% de los votantes, frente a la negativa del 39,8%. No obstante, la participación fue baja, de un 59,4%. La posición del Gobierno fue polémica debido a que en la campaña electoral de 1982 el PSOE se había manifestado en contra de la permanencia usando el eslogan "OTAN, de entrada no" y, como antes se señalaba, en la campaña del referéndum propuso lo opuesto.

### *El movimiento antinuclear*

Como se mencionaba, el movimiento anti-OTAN se asociaba al antinuclear como expresión del antiamericanismo identificable, asimismo, con posiciones contrarias al

capitalismo. No obstante, no siempre estuvo presente el carácter anti-sistémico, ya que muchas de estas iniciativas también enlazaban con grupos por la paz que no admitían legitimidad en el uso de la violencia, aunque fuese en un contexto revolucionario. Como la energía nuclear estaba controlada por el Estado en una triple vertiente (como promotor, financiador y mantenedor), la oposición a ésta cuestionaba el modelo organizativo estatal, además del económico.

El origen del movimiento antinuclear coincide con la promoción de las primeras centrales en España a partir de la reunión mantenida en 1956, en Bilbao, por representantes de los sectores industrial y eléctrico con la administración del Estado. Los acuerdos iniciales fueron desarrollados en la Ley de Energía Nuclear de 1964, que supuso la apertura de las primeras centrales: Zorita (Guadalajara) en 1968, Santa María de Garoña (Burgos) en 1971 y Vandellós I (Tarragona) en 1972.

Las dificultades de movilización inherentes al contexto dictatorial se redujeron tras la muerte de Franco. El incremento de acciones, articuladas en torno al recién creado Movimiento Ecologista, fue considerable a partir de la aprobación del Plan Energético Nacional en 1975, que se proponía elevar el número de centrales nucleares en España a treinta y siete, aunque luego sólo llegaron a funcionar diez de las previstas.

La consolidación de la lucha se produjo con la creación de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) en 1977, principal organismo impulsor del movimiento hasta 1990, año de su disolución. A las reivindicaciones iniciales se sumaron las denuncias del excesivo consumo de agua generado por las centrales, los peligrosos transportes de residuos y combustibles por áreas habitadas y los cementerios nucleares.

#### El movimiento antinuclear en el País Vasco

La primera marcha antinuclear vasca tuvo lugar en 1973, ya entonces con signos de convertirse en una reivindicación que sirvió de vehículo de expresión del nacionalismo. Cuando se inicia la construcción de la central de Lemóniz (Vizcaya) se consolidó la opinión de que estos proyectos se desarrollaban al margen de la opinión del pueblo vasco y en contra de sus intereses y seguridad. Esta idea terminó cristalizando en una de las señas de identidad definitorias del nacionalismo vasco y eso explica que en las manifestaciones fuera haciéndose

habitual la utilización de distintivos como la ikurriña mezclados con los característicos de la lucha antinuclear.

Como era previsible, los partidos nacionalistas vascos de izquierda se hicieron eco de esa sensibilidad y, aun más lejos, ETA militar perpetró atentados contra las instalaciones y empleados de Lemóniz, que se saldaron con siete víctimas mortales. La protesta contra esta central nuclear aglutinó colectivos de variado carácter, aunque las dos organizaciones que destacaron fundamentalmente fueron los Comités Antinucleares de Euskadi y la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear.

La primera movilización importante contra Lemóniz fue en 1976. En 1977, coincidiendo con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Diputación de Vizcaya, que transformaba de rústicos a industriales los terrenos en los que se asentaba la central, las protestas alcanzaron su punto culminante, pero con escasos resultados que fueron la justificación de ETA para provocar los atentados contra Lemóniz y la sede de la empresa Iberduero, la responsable de su construcción.

En 1978 fue aprobado un nuevo Plan Energético por parte del gobierno de la UCD que paralizaba todos los proyectos nucleares en curso en el País Vasco salvo el de Lemóniz. El Ayuntamiento de esta localidad ordenó, sin éxito, la interrupción de los trabajos, y se organizaron nuevas movilizaciones. En estas circunstancias, ETA secuestró y mató al ingeniero de la central José María Ryan.

La percepción pública de la imagen de la energía nuclear se vio seriamente comprometida a nivel mundial a raíz del accidente de la central estadounidense de Three Mile Island (Harrisburg) en 1979. Una de las múltiples consecuencias de ello fue que un grupo de técnicos elaboraran un informe en el que se desaconsejaba continuar con la construcción de Lemóniz. No obstante, el gobierno desestimó su contenido, lo que provocaría una nueva oleada de manifestaciones. Por fin, en 1984, el gobierno del PSOE decretó una moratoria nuclear que afectó a los dos grupos de Lemóniz, junto con los de Valdecaballeros (Badajoz) y el de Trillo II (Guadalajara).

También serían significativas las marchas contra las fábricas de armamentos y a favor de su conversión en producción civil de utilidad social desde principios de la década de 1990,



lo que originó la formación del colectivo Gasteizkoak y, más adelante, la Plataforma Moldaketa.

#### El movimiento antinuclear en Cataluña

Al igual que en el caso vasco, el movimiento antinuclear en Cataluña también tuvo relación con el nacionalismo, aunque en menor medida. Sería especialmente significativo en Tarragona, donde vecinos de L'Ametlla de Mar se manifestaron contra la central de Vandellós, en funcionamiento desde 1972. El aumento de la temperatura del agua provocado por su presencia afectó negativamente a la pesca de la zona, medio de vida de la mayor parte de la población del municipio. Así, en 1975 fueron atacados empleados de Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A. (FECSA) en el contexto de unas manifestaciones convocadas por la Agrupación de Vecinos de L'Ametlla y la Cofradía de Pescadores. Este rechazo contrastó con la ausencia de oposición del Ayuntamiento de Vandellós, a pesar de que el denominado “tren de la muerte”, que transportaría los residuos a Francia para su procesamiento, se trazó cerca de su casco urbano.

Asimismo, bajo la dirección del párroco Miguel Redorat, fueron objeto de movilizaciones en contra los dos grupos nucleares de Ascó, que iniciaron su construcción antes de lograr la autorización pertinente y sin desvelar cuál sería el uso del suelo. A pesar de las reiteradas protestas los dos grupos comenzaron a funcionar en 1983 y 1985.

Por otra parte, en Barcelona, durante los últimos meses de 1988, se inició la Campaña contra el comerç d'armes, promovida por Justícia i Pau, la Fundació per la Pau y la Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals. En ella se realizaron tareas de investigación y denuncia de asuntos relacionados con la industria y el comercio de armas. Esta iniciativa se transformaría en 2001 en el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delás.

#### El movimiento antinuclear en el resto de España

Las acciones tuvieron un desarrollo especial entre 1983 y 1984, cuando unos cuatrocientos municipios españoles aprobaron mociones en las que declaraban su territorio libre de armas nucleares. El balance de las movilizaciones es diverso: desde los éxitos

El movimiento antinuclear y la izquierda radical española durante la Transición

obtenidos contra la central de Valdecaballeros (Badajoz), a las derrotas del movimiento opuesto a la de Almaraz (Cáceres).

Una de las reivindicaciones de mayor éxito se focalizó en la oposición a los vertidos de residuos radioactivos en la Fosa Atlántica, a unos setecientos kilómetros de Galicia, en un cementerio nuclear de uso internacional. La VII reunión del Convenio de Londres sobre vertidos radioactivos al mar aprobaría en 1983 una moratoria que no fue aceptada por el gobierno británico y que sería el primer paso para la aprobación, en 1985, de la propuesta española de aplazar definitivamente los vertidos en la zona.

Asimismo, fue importante el movimiento de rechazo al almacenamiento de residuos radioactivos en El Cabril (Hornachuelos, Córdoba). Este improvisado cementerio nuclear utilizó una antigua mina de uranio sin contar con la autorización y garantías pertinentes. Los vertidos, en este caso, procedían de las centrales españolas.

Por otra parte, también tuvieron un gran desarrollo las movilizaciones contra las centrales de Zorita (Guadalajara) y Trillo (Guadalajara), y un proyecto nuclear en el Campo de Gibraltar, que provocó protestas en Tarifa y Algeciras.

### *Los grupos de izquierda radical relacionados con el movimiento antinuclear*

Las confrontaciones bélicas generadas por las aspiraciones hegemónicas de los principales centros de poder y la amenaza medioambiental provocada por estos enfrentamientos y el tipo de actividad económica, se asocian al modo de organización y producción del capitalismo. Esto explica que dentro del pacifismo y el ecologismo puedan anidar posiciones antisistémicas, no siempre de modo explícito.

Tanto pacifismo como ecologismo pueden ser considerados movimientos sociales que, en algunas ocasiones, han sido aprovechados por organizaciones políticas para lograr aumentar su apoyo electoral. En otras ocasiones, estos colectivos han terminado fundando partidos específicos, como los genéricamente denominados “Verdes”. La sensibilidad por los problemas medioambientales o el rechazo a la guerra se asocian habitualmente con los partidos de izquierda radical. Esto tiene lógica cuando manifiestan una oposición al sistema

que genera conflictos y amenazas ecológicas, es decir, el capitalismo. Sin embargo, si no hay un cuestionamiento del orden establecido y tan sólo se toma conciencia de que el ecosistema funciona correctamente sólo si existe equilibrio, no necesariamente tendrían por qué considerarse anticapitalistas. Naturalmente, la perspectiva cambia cuando se toma en consideración que ecologismo y pacifismo cuestionan intrínsecamente el modo de organización vigente y, por tanto, los intereses de los que ostentan el poder económico. Es decir, que consciente o inconscientemente, estos movimientos sociales –y los partidos políticos vinculados a ellos- ponen en crítica el sistema aunque en algunas de estas organizaciones no se pretenda defender posturas anticapitalistas.

En este sentido, las movilizaciones antinucleares cuestionan uno de los pilares fundamentales de la estructura económica: la energía. Por ello, las vertientes de esta lucha son múltiples: la ecológica por los peligros medioambientales que pueden generarse, la pacifista por el armamento altamente destructivo que puede fabricarse, y la antisistémica por el modo en que se organiza la economía capitalista en su política energética.

La prensa conservadora española del período insistió en la idea de que los partidos comunistas eran los que defendían y alentaban en Europa los movimientos ecologistas y pacifistas, instrumentos para acabar con el capitalismo siguiendo las directrices de la URSS. El Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) estaría detrás de una campaña contra las armas, bases militares y centrales nucleares estadounidenses para debilitar su capacidad bélica en Europa y lograr que la URSS pueda imponerse sobre el bloque capitalista. Cuando se produjo el accidente de la central nuclear de Chernobyl en 1986, estos medios de comunicación conservadores denunciaban que no hubo movilizaciones en protesta de dimensiones similares a las que se organizaron cuando se produjo el accidente de la central estadounidense de Harrisburg en 1979, como posible prueba de esa idea.

A pesar de estas teorías, lo cierto es que el Partido Comunista de España (PCE) no siempre se posicionó contra la energía nuclear y cuando lo hizo, su fin último fue el de acercarse a los colectivos ecologistas para ampliar su base electoral. No fue infrecuente que se defendiera en las filas del PCE que la energía nuclear era el modo más limpio y seguro de obtención energética, aunque asegurando un uso pacífico y nacionalizando su producción.

Con ello, además, España lograría emanciparse de la dependencia del petróleo. Una estrategia similar se dio en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).

El mapa de organizaciones y partidos políticos relacionados con el movimiento antinuclear en España fue desigual, y, como era previsible, es más denso en aquellas áreas afectadas directamente por la instalación de centrales, cementerios nucleares o fábricas de uranio.

En las dos Castillas, durante el período 1976-1982, los colectivos que participaron en la lucha antinuclear no se constituyeron en partido político y la acción se desarrolló fundamentalmente en el ámbito local. Las principales actuaciones se dirigieron contra cuatro objetivos: los grupos nucleares de Trillo (Guadalajara), las centrales de Santa María de Garoña (Burgos) y Zorita (Guadalajara) y la fábrica de uranio de Juzbado (Salamanca). Sólo se obtuvieron resultados en Trillo, donde se logró paralizar la construcción del segundo grupo.

El caso vasco es más complejo, y en él se mezclan organizaciones locales con partidos políticos y sindicatos. Aquí la vinculación del movimiento antinuclear con la izquierda radical y el nacionalismo es más evidente que en otras zonas. La mayor articulación de las acciones propició un nivel de éxito considerable en las reivindicaciones, que lograron paralizar los proyectos de Lemóniz (Vizcaya), Deva (Guipúzcoa) y Tudela (Navarra). Las organizaciones políticas y sindicales más implicadas en la lucha antinuclear, en ocasiones en coordinación con colectivos sociales, fueron el Movimiento Comunista Revolucionario, el Movimiento Comunista de Euskadi (OIC), la Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Partido de los Trabajadores Patriotas Revolucionarios (LAIA), Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra, el Partido Socialista Vasco (ESB), el Partido de los Trabajadores de Euskadi y Comisiones de Obreros Abertzales (LAB).

En Aragón las acciones desarrolladas entre 1976 y 1982 se encaminaron hacia la oposición a la construcción de la central del Cinca (Huesca) y del grupo nuclear de Escatrón (Zaragoza), obteniéndose resultados positivos en el segundo caso, al lograrse la paralización de las obras. El liderazgo de estos movimientos estuvo en organizaciones de ámbito local desvinculadas de partidos políticos.

En Valencia las actuaciones se concentran entre 1976 y 1982 en la lucha contra la central de Cofrentes (Valencia), aunque sin lograr el propósito de su cierre. Como en el caso

castellano o aragonés, la mayor parte de las organizaciones eran de carácter local, y desvinculadas de partidos políticos o sindicatos. La convergencia de organizaciones fue importante, hasta el punto de que unas cincuenta deciden agruparse en 1978 en la Coordinadora de Grupos Ecologistas del País Valenciano. Un caso particular fue el del Grupo Ecologista Libertario (GEL), el único de carácter explícitamente revolucionario, y que se expandió durante las acciones contra la central de Cofrentes.

Una característica del movimiento en Cataluña fue que los comités antinucleares se quejaron habitualmente de que sus movilizaciones sólo eran apoyadas por los partidos extraparlamentarios de izquierda y que, en contraste, los que tenían representación se posicionaron al margen. Quizás la comparación con el caso vasco pesaba en esta percepción. No obstante, Esquerra Republicana de Catalunya se incorporó activamente en algunas de las denominadas “Semanas Antinucleares” y participó en varias de las manifestaciones contrarias a la energía nuclear que se convocaron en Barcelona entre 1978 y 1980. Los principales objetivos fueron los grupos de Ascó (Tarragona) y Vandellós (Tarragona), lográndose el cierre del grupo primero de Vandellós tras el accidente producido en 1989. Una línea de lucha concreta se desarrolló por el grupo independentista “Terra Lliure”, autor de atentados contra objetivos pertenecientes a Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A. (FECSA) entre 1980 y 1984.

En Murcia la mayor parte de las acciones antinucleares desarrolladas entre 1976 y 1982 fueron responsabilidad del Grupo Ecológico de la Región Murciana, que focalizó sus objetivos contra el proyecto nuclear en la Marina de Cope (Águilas), cerca de Lorca, que comenzó a planificarse en 1973 por Hidroeléctrica Española (la actual Iberdrola). El lugar elegido era especialmente peligroso al tratarse de una zona de alto riesgo sísmico. Finalmente se logró paralizar el proyecto por la masiva movilización de vecinos de las localidades afectadas directamente, liderados por el ingeniero Pedro Costa Morata, y con el apoyo de organizaciones como el Grupo Ecológico de la Región Murciana.

Las organizaciones antinucleares andaluzas también tuvieron un carácter local y en pocas ocasiones estuvieron relacionadas con partidos políticos. Buena parte de ellas eran grupos ecologistas que solían desarrollar acciones en áreas concretas, a veces de coordinación con movimientos vecinales y asociaciones. Se implicaron particularmente el Colectivo Ecologista Cordobés, que articuló la oposición al cementerio de El Cabril (Hornachuelos,

El movimiento antinuclear y la izquierda radical española durante la Transición

Córdoba), que aún se mantiene; y la Comisión de Defensa de la Naturaleza (Algeciras), que se manifestó contra el proyecto nuclear de Tarifa (Cádiz) finalmente paralizado.

El caso extremeño es parecido al andaluz en lo que se refiere al modo de articulación de las organizaciones. Los objetivos principales fueron los proyectos de construcción de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Valdecaballeros (Badajoz), lográndose la cancelación de la segunda.

### *Conclusiones*

El movimiento antinuclear español durante la Transición tuvo escasos apoyos internacionales o se mantuvo inconexo de las acciones desarrolladas en otros países. La mayor parte de las colaboraciones procedieron de la ONG “Amigos de la Tierra” y de Greenpeace. El supuesto interés de la URSS por desgastar el bloque capitalista promoviendo una oposición a sus industrias de energía nuclear no se tradujo en nada aparentemente concreto en España.

La mayor parte de las movilizaciones estuvieron coordinadas por colectivos ecologistas locales y provinciales en las dos Castillas, Aragón, Murcia, Andalucía y Extremadura; Sin embargo, en el País Vasco y Cataluña, y, en menor medida, en el País Valenciano, a estos grupos locales se sumaron sindicatos y partidos de izquierda radical y nacionalistas.

Las acciones más numerosas se desarrollaron en la costa de Cataluña, el País Vasco, Navarra, Guadalajara, Extremadura y Valencia.

La relación del movimiento antinuclear con el pacifismo y el ecologismo es evidente. Esta lucha se mezcló con la oposición a la existencia de bases militares estadounidenses en España y a la integración en la OTAN.

La defensa de la desaparición de las centrales nucleares sirve para cuestionar el sistema capitalista y, particularmente, el imperialismo de los Estados Unidos (por otra parte, el legitimador del franquismo tras los acuerdos bilaterales de 1953). Por tanto, fue un movimiento válido también para deslegitimar a la propia dictadura, generadora de violencia

represora y colaboradora con el imperialismo de EEUU. Con esa idea, algunos pensaron que la Transición marcaba el fin de esa lucha.

En definitiva, la lucha antinuclear en España se enmarca dentro de una cierta idea de la paz y el ecologismo que estuvieron muy vinculados a la dialéctica de la Guerra Fría, en la que la amenaza de una tercera guerra mundial con armamento nuclear era el peligro de mayores dimensiones para la humanidad.

## **EL MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA. IDENTIDADES Y POSTURAS ANTE LA TRANSICIÓN, 1975-1982**

Carlos Ángel ORDÁS

### **Resumen:**

La propuesta aborda dos cuestiones relacionadas al movimiento antimilitarista: por un lado, exponer la identidad política que se consolidó como mayoritaria entre los grupos del incipiente movimiento antimilitarista español durante los últimos años de la década de los setenta e inicios de los ochenta. Por otro, de manera específica como analizar cómo se situaron estos grupos ante el proceso de transición vivido en España. Para ello se considerará a aquellos grupos que se formaron en torno a la resistencia al servicio militar obligatorio, desde los cuales se gestó, desarrolló y expandió el movimiento antimilitarista de la década de los ochenta. Un movimiento que criticó abiertamente el proceso de cambio del régimen dictatorial y el sistema democrático resultante.

Para la comunicación se utilizan fuentes primarias de los archivos históricos como por ejemplo los del Movimiento de Objeción de Conciencia de Barcelona, del Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenish de Ámsterdam, las principales revistas antimilitaristas de la época, así como fondos personales de activistas vinculados a los grupos que conformaron el movimiento antimilitarista en España.

**Carlos Ángel Ordás** es Doctor en Historia comparada, política y social por el Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica – Universitat Autònoma de Barcelona (CEFID-UAB). Su tesis doctoral lleva por título: “De objetores a insumisos. Surgimiento, expansión y desarrollo del movimiento antimilitarista en Catalunya, 1971-1989” (fecha de lectura, 4 de febrero de 2016).



*Introducción: Articulación y expansión del movimiento antimilitarista durante la década de los setenta*

El movimiento antimilitarista en España tiene sus orígenes en la década de los setenta, concretamente en el desarrollo de la objeción de conciencia que se inició con el caso de Pepe Beunza, el cual se negó a realizar el servicio militar obligatorio (SMO) en enero de 1971. Durante la primera mitad de la década, sólo son conocidos cinco casos más de jóvenes que se negaron a cumplir el SMO, hasta que en 1975 se puso en marcha la llamada objeción colectiva, por la cual un grupo inicial de cinco jóvenes comenzaron a realizar un servicio civil alternativo al SMO en el barrio obrero de Can Serra, en L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona). Al año siguiente los jóvenes de Can Serra recibían el relevo de una nueva generación de objetores; además, la experiencia era reproducida en otras ciudades españolas como Bilbao, Madrid, Málaga, Reus, Tarragona y Vic. La objeción de conciencia (OC) comenzaba a dejar de ser una cuestión desconocida en España, siendo una fecha determinante enero de 1977, cuando alrededor de un centenar de jóvenes de todo el territorio nacional se reunían en Madrid y fundaban el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC). Este grupo creció enormemente durante los últimos años de la década, fundándose multitud de grupos en muchas ciudades de la geografía española, especialmente en las capitales de provincia. Además, es importante tener en cuenta que entre finales de los setenta y principios de los ochenta, formaban parte del MOC grupos muy diversos que no sólo se centraban en la objeción de conciencia; había grupos que se centraban en la noviolencia, ecologistas, grupos explícitamente antimilitaristas e incluso algún grupo de la CNT. En todos los casos había también objetores pero sin que actuasen desde el marco exclusivo de la objeción.

Hasta la fundación del MOC, se puede afirmar que la objeción de conciencia atrajo sobre todo a jóvenes que entendían la resistencia al SMO desde motivaciones de pacifismo cristiano y desde la doctrina de la noviolencia. Esto se debe a que la OC se desarrolló en sus inicios desde los círculos de noviolencia que comenzaron a crearse durante la década de los sesenta. Estos círculos estaban integrados, en su mayoría, por personas católicas afines a los preceptos del Concilio Vaticano Segundo. Mientras que los partidos de la izquierda política (desde el PSOE hasta aquellos de la izquierda revolucionaria), eran firmes partidarios de la

realización del servicio militar. Atendiendo a la idea de la revolución francesa del pueblo en armas como encargado de defender la nación. Sostenían que la labor desde dentro del ejército era necesaria para poder conseguir subvertir a este y volver a ponerlo “del lado del pueblo”. Además, muchos de estos partidos continuaban considerando la vía insurreccional como herramienta de cambio, lo cual les alejaba de conceptos como la noviolencia o el pacifismo. Por otra parte, continuaba existiendo un importante porcentaje de jóvenes que no estaban dispuestos a formar parte del ejército de ninguna de las maneras y continuaron optando por la huida. Este porcentaje anual de prófugos al ejército, representaba entre otros, a jóvenes de tradición anarquista y su consecuente antimilitarismo.

Sin embargo, durante los últimos años de la década de los setenta, la objeción de conciencia comenzó a ensanchar enormemente sus bases sociales, llegando a los grupos del MOC jóvenes de culturas políticas afines al socialismo, anarquismo y nacionalismo. De hecho, durante aquellos años también comenzaron a crearse grupos específicamente antimilitaristas como en Barcelona el Grup d'Acció No-Violenta Anti-OTAN (GANVA), que a partir de pasó a denominarse Grup Antimilitarista de Barcelona (GAMBA) en 1981; el Col·lectiu Antimilitarista Llibertari de València, el Grupo Antimilitaristas de Basauri, Garbanzo Negro en Valladolid, la Cordinadora Antimilitarista de Canarias, etc.

El ensanchamiento de las bases de la objeción supuso un importante debate dentro del MOC, desarrollado entre grupos y dentro de estos. El replanteamiento ideológico e identitario, fue sin duda uno de los aspectos fundamentales de aquellos años hasta casi 1985. Se discutieron cuestiones de base cómo el propio sentido de la OC o la asociación hasta entonces intrínseca e incuestionable, entre noviolencia y objeción.

El debate sobre la identidad y la ideología del MOC fue determinante por dos cuestiones. Para comenzar por el importante papel del MOC en la articulación del movimiento antimilitarista. El MOC fue el grupo que vertebró el movimiento antimilitarista en España y fue el grupo de referencia desde su fundación y durante gran parte de la década de los ochenta, siendo el principal polo de atracción de nuevos y potenciales activistas del movimiento antimilitarista. También existieron otros grupos que operaron de manera paralela al MOC, pero ninguno presentó un grado de desarrollo y coordinación como este. Además, muchos de estos grupos paralelos, también formaban parte del MOC (aunque los episodios de

escisión fueron frecuentes). Salvando las distancias, se podría afirmar que el MOC tuvo un papel en el movimiento antimilitarista, similar al de la CNT en el movimiento anarquista (al menos hasta 1985).

Por otra parte, el debate sobre la identidad y la ideología marcó el desarrollo de este grupo y, consecuentemente, de una parte importante del movimiento antimilitarista. A la objeción de conciencia llegaron jóvenes con inquietudes muy diversas: desde aquellos que entendían la OC como un fin en sí mismo, aspirando a la mejor regulación posible de la OC y el establecimiento de un servicio civil también cercano a sus demandas; hasta jóvenes que entendían el activismo desde la OC como integrante de un movimiento antimilitarista que formaba parte de un movimiento político y social más amplio, cuya pretensión última era una transformación profunda de la sociedad, de manera que la OC era considerada un mero instrumento. Estas diferencias también implicaban diferencias a la hora de interpretar el proceso de transición y el papel de los partidos políticos parlamentarios. Es por tanto necesario explicar cuáles fueron las diversas tendencias existentes, así como cuál fue la que terminó imponiéndose, para poder analizar la complejidad del movimiento antimilitarista ante el proceso de cambio político.

*Un movimiento heterogéneo. Las diversas formas de entender la objeción de conciencia, el pacifismo y el antimilitarismo*

Durante aquellos años se trataba de resolver qué significaba ser objetor de conciencia y cómo ubicar esta cuestión dentro de los movimientos sociales. Este proceso no fue sencillo, de hecho, entre 1977 y 1980, la dinámica general de los grupos reprodujo una secuencia tipo de fundación-disolución-refundación. En la mayor parte de los casos, esta dinámica respondía a los propios conflictos internos de los grupos, donde pronto afloraron estas diferencias ideológicas que condicionaban la táctica y estrategia de los colectivos.

Los grupos que se mantuvieron estables durante el periodo fueron los de Barcelona, Bilbao y Madrid, aunque también fueron significativos en aquellos años los de San Sebastián y Terrassa. Los tres primeros, por volumen y actividad, se consolidaron como los grandes referentes a nivel estatal. En ellos se reprodujeron estos debates, que en no pocas ocasiones

supusieron fuertes divisiones que en ocasiones derivaron en escisiones, tanto de sectores más “moderados”, como de más “radicales”. Incluso durante los primeros años del MOC, los tres grupos representaron las diversas tendencias en las asambleas generales del MOC: el grupo de Madrid entendía que el MOC debía centrarse en la consolidación de la OC y de un servicio civil sustitutorio adecuado, proponiendo que el MOC se convirtiera en una especie de sindicato de objetores. Por tanto, entendía que era fundamental la labor “parlamentaria” resultante del contacto con partidos políticos. El grupo de Bilbao era radicalmente contrario a esta perspectiva; entendían la OC como un elemento más de una lucha por la transformación profunda de la sociedad, donde no se podía esperar nada de los partidos parlamentarios. En una situación intermedia se colocaba el MOC de Barcelona, que, si bien entendía que el MOC debía aspirar a esa transformación profunda de la sociedad, no debía cerrar las puertas al contacto con partidos políticos parlamentarios.

De todos estos posicionamientos se trató de llegar a acuerdos de consenso que incluyesen todas las tendencias posibles. Esto fue tratado en el primer congreso del MOC, en Landa (Vitoria) en verano de 1979. La declaración de Landa fue fruto de este intento de consenso entre las diversas tendencias. No obstante, las diferencias continuaron existiendo y los grupos del MOC experimentaron una etapa de fuerte crisis entre 1980 y 1982, donde gran parte de estos desaparecieron y los más grandes entraron en estado latente. Esto cambió a partir de 1983, cuando los grupos comenzaron a refundarse, crecer y a volver a una importante actividad. En este segundo periodo que se iniciaba, los debates sobre la identidad y la ideología fueron más sencillos que en los años precedentes ya que, tras escisiones y abandonos, en los grupos se habían mantenido aquellas personas que entendían la OC como algo inserto en las luchas sociales y de transformación social. La nueva generación de objetores llegó con unas ideas similares, de manera que los grupos del MOC enfocaron su actividad desde estos planteamientos. Por tanto, en el MOC se consolidó la tendencia “antimilitarista” o “radical” de la OC, que entendía el antimilitarismo como una lucha “revolucionaria”, “anticapitalista”, “antiautoritaria” y “antipatriarcal”.

El resultado final de este proceso, fue la declaración ideológica del segundo congreso del MOC, en Madrid en mayo de 1986:

“El MOC es un movimiento político, radical y alternativo, dedicado específicamente al trabajo antimilitarista, y que participa solidariamente del desarrollo de otras luchas revolucionarias. Es radical en cuanto que combate las raíces del militarismo y no se plantea exclusivamente la reforma de sus consecuencias más escandalosas. Es alternativo en tanto que busca la transformación tanto de estructuras económicas y en sus modelos de producción dominantes, como en lo ideológico y cultural, partiendo de las iniciativas de base y de las luchas y necesidades cotidianas.

El antimilitarismo es un planteamiento de lucha revolucionaria que se enfrenta a la estructura y funciones militares y sus implicaciones sociales, contra el sistema de dominación política, económica e ideológica; sistema que encuentra su último baluarte y una de sus principales vías de expansión en la movilización de personas y recursos para la preparación de la guerra. La actividad antimilitarista se desarrolla: 1) en la crítica y desenmascaramiento del papel del militarismo en todos los campos, promoviendo el debate en profundidad sobre sus fundamentos ideológicos; 2) en las movilizaciones y protestas sobre la actividad puntual o general del militarismo; 3) en la desobediencia civil a sus imposiciones. A largo plazo, el antimilitarismo lucha por un modelo de organización social basado: a) en la propiedad y utilización colectiva de los medios de producción, comunicación e información; b) en la sustitución de todas las estructuras y relaciones de dominación por la descentralización y la autogestión en la toma de decisiones; c) en un modo de vida y producción en armonía con el medio ecológico; d) en el replanteamiento de los roles sexuales que supere el patriarcalismo; e) en el desarrollo propio de la cultura de cada pueblo dentro de un internacionalismo solidario que supere la opresión estatalista actual [...].”

Cabría señalar aquí, cómo todo este proceso de división y definición, también se produjo una división conceptual. Aquellos que defendieron la resistencia al SMO como una lucha de transformación social profunda, comenzaron valerse del término “antimilitarista” para identificar la lucha y la identidad del MOC. Mientras que aquellos objetores que se escindieron del MOC comenzaron a usar el término “pacifista”. Esta diferencia entre pacifista y antimilitarista, no estaba tan clara durante la década de los setenta; Pepe Beunza o los objetores de Can Serra por ejemplo, siempre consideraron su objeción como una manifestación “pacifista”, entendiendo este concepto como “pacifismo activo”, activista y crítico, situándolo en unas coordenadas muy similares a la que podían tener los “antimilitaristas” de la década siguiente. La diferencia en el uso de conceptos durante la década siguiente, hay que entenderla dentro de este proceso de escisión.

Por último, conviene señalar como desde finales de los setenta, los sectores más “antimilitaristas” del MOC consideraban necesaria la aproximación hacia otros grupos políticamente afines; concretamente a los colectivos anarquistas y de la izquierda revolucionaria. Estos últimos comenzaron a variar sus posicionamientos con respecto a la RSMO a comienzos de la década de los ochenta. La convergencia se produjo en las campañas de 1980 y 1982 contra la entrada de España en la OTAN. Por otra parte, el intento de golpe de estado del 23F, hizo más evidente la imposibilidad real de controlar los cuarteles. El acercamiento definitivo se generó con la consolidación de los planteamientos del sector “antimilitarista” del MOC, con el inicio de la nueva campaña por la salida de la OTAN que se inició con la llegada del PSOE al Gobierno y ante la evidencia de que la cuestión de la resistencia al SMO contaba con un apoyo cada vez mayor entre la juventud. Fruto de todo esto y mediante la importante labor bisagra del GAMBBA y del MOC Barcelona, se creaba la campaña anti-mili que desembocó en los Mili KK. Grupos que pretendían ampliar la acción antimilitarista, no centrándose exclusivamente en la RSMO y tratando de desarrollar una campaña más amplia de denuncia de las condiciones de los soldados en los cuarteles. Los Mili KK acabaron teniendo una importante relación con los partidos de izquierda revolucionaria como eran la LCR y el MC. De manera que los Mili KK se expandieron principalmente por los territorios donde estos partidos tuvieron más incidencia social.

### *El movimiento antimilitarista y el proceso de cambio político*

Como se ha tratado de explicar hasta ahora, es importante tener claro como dentro del movimiento antimilitarista existían diversas voces, siendo el sector más “radical” o “antimilitarista” el que se consolidó como mayoritario, fruto de una evolución y desarrollo ideológico interno. Por tanto, entre finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, los puntos de vista y los planteamientos políticos eran diversos, como también lo era el análisis del proceso de transición, el cual variaba en función del grupo y de la persona. No obstante, la mayor parte de las referencias que se pueden encontrar sobre el contexto político, provienen del sector más “antimilitarista”. Estas valoraciones se desarrollaron en las

publicaciones propias de los grupos como *Agenda* (Barcelona), *AOC Informa* (Terrassa), *Caracol* y *Objeción* (ambas de Bilbao), *Oveja Negra* y *Acción No-Violenta* (Madrid), *Boletín de Objeción* (Zaragoza), *A Colps* (Valencia), etc. Entre estas revistas cabe destacar *La Puça i el General*, publicación comenzada por el GANVA en diciembre de 1979 y que se publicó con una periodicidad variable hasta 1990. *La Puça* fue una de las revistas de referencia del movimiento antimilitarista durante toda la década de los ochenta, manteniéndose durante la primera mitad de la década, cuando la mayor parte de las otras publicaciones habían dejado de existir.

Por lo que respecta a las referencias y reflexiones concretas sobre el proceso de transición por parte de los grupos del MOC, estas se centraron básicamente en cuatro tesis ampliamente compartidas: la valoración del proceso como un proceso de reforma sin ruptura; la influencia del ejército en este proceso; la consolidación de una democracia burguesa que beneficiaba al “capital” y a la “burguesía”, donde la “clase trabajadora” resultaba inequívocamente perdedora; y por último, la crítica al papel del PSOE y al PCE en este proceso.

En primer lugar, el proceso de transición fue considerado de manera mayoritaria por los grupos que formaron parte del MOC, como un proceso de reforma sin ruptura. Esto se consideró así, por ejemplo, desde la continuidad del personal político en las estructuras de Gobierno, lo cual se trasladó, por ejemplo, en la cuestión de la OC. Así en una carta anónima publicada en *Acción No-Violenta*, en enero de 1977 se espetaba a Suarez:

“tu Gobierno [Adolfo Suarez] tiene al frente de los ministerios a los mismos tíos que el pasado. Y fue este Gobierno, del que tú también formabas parte, el que censuró, arrestó, condenó y encarceló a 7 objetores que realizaban un ‘servicio civil’ autogestionado en Can Serra. Y ahora sois vosotros mismos los que, en nombre de los derechos humanos ‘legalizáis’ la cosa. ¿No te huele a chamusquina Adolfo?”.

Para todos los sectores del MOC, el papel de ejército había sido clave en este proceso. De hecho, la incidencia política de la institución castrense era fundamental para entender las limitaciones del proceso de transición. El proceso de “reforma política” se había efectuado sin la necesaria depuración profunda del ejército, la cual no se había realizado debido al importante y necesario papel “contrarrevolucionario” de la institución. Para los antimilitaristas, el ejército estaba colocado en el bando del Estado, y por ende, del lado de la burguesía y el

capital, formando entre todos lo que denominaban la “clase dominante”. Durante el proceso de transición, esta “clase dominante” tuvo cierto temor de las organizaciones populares y su posible iniciativa en el proceso de cambio político; el ejército y su amenaza de intervención era, para los antimilitaristas, la fuerza clave que determinaba el resultado del proceso de cambio. Como evidencia de esto había sido, por una parte, la ley de Reforma Militar de Gutiérrez Mellado y el nuevo Código de Justicia militar. En ambos casos, estas “tímidas reformas” atendían simplemente a la necesidad de España de adaptarse a los tiempos, pero no implicaban transformaciones profundas de la institución con respecto al régimen anterior, de manera que el ejército mantenía su capacidad para “dirigir la vida política del Estado”.

Por otra parte, el intento de golpe de estado del 23F, significó una evidencia más del papel de amenaza real del ejército. Los antimilitaristas consideraron este hecho como una evidente advertencia e intromisión en desarrollo del proceso de transición. Lejos de interpretar el fracaso del golpe como la manifestación de la incapacidad de una parte del sector reaccionario de la derecha, de poder organizar con éxito un golpe de Estado. Consideraban por tanto, que el 23F era una muestra de que las fuerzas reaccionarias (entre ellas el ejército), dejaban claro los límites políticos que no se podían sobrepasar. Este episodio también supuso reafirmar la necesidad de desarrollar una labor antimilitarista, más allá de la resistencia al SMO.

Sobre el papel que el movimiento atribuía al ejército, habría que advertir que la teoría del movimiento antimilitarista planteaba diferencias significativas entre el Gobierno y el Estado. Por un lado, se le atribuía a la institución castrense una autonomía que prácticamente se la podía equiparar con independencia total con respecto del gobierno, siendo capaz de actuar, incidir e interferir de manera activa en la vida política y social del país. Por otro lado, también se le consideraba el brazo armado del Estado, al servicio de la “clase dominante”, que era la que realmente controlaba los aparatos del Estado, según los antimilitaristas. Esto explica, porqué el ejército podía actuar y presionar a los gobiernos de la transición, cuando estos se alejaban demasiado de los determinados intereses políticos o económicos de aquellos.

Por lo que respecta al nuevo sistema democrático, este, (al igual que el proceso de transición), dejaba bastante que desear para los antimilitaristas. La “democracia burguesa”, como era definida, significaba simplemente la adaptación necesaria de la “clase capitalista”



española a los tiempos. El establecimiento de un sistema democrático fue forzado por la oposición antifranquista, pero esta clase social supo adaptarse al cambio, controlarlo y sacar beneficio del proceso. La cuestión de fondo para muchos antimilitaristas residía en que la “democracia burguesa”, significaba, en definitiva, un sofisticado método de control social basado en conseguir la legitimidad social y así negar cualquier horizonte revolucionario o de transformación social profunda.

Así por ejemplo, el grupo de objetores de Asnurri en noviembre de 1979, definía el nuevo sistema político que se estaba implantando en España, bajo los siguientes parámetros:

“La democracia burguesa – sistema político de los países capitalistas avanzados – legitima el estado capitalista y lo perpetua sin dejar posibilidades a opciones revolucionarias. A través de este sistema político que la burguesía impone, se integra a las fuerzas progresistas (partidos y sindicatos de izquierda) que (¿ingenuamente?) aspiran a transformar la realidad participando en la democracia burguesa y construyéndola. La mayor parte de esfuerzos del trabajo político va orientado a la recaptación de votos para conseguir el poder. A través del voto, se delegan las responsabilidades políticas individuales a la ‘clase política’, y se deja de participar directamente en el trabajo político [...] promoviendo la no participación del pueblo.

En el estado español, los resultados de la democracia burguesa son de los más demostrativos: una mayoría de derechas en el parlamento (UCD, AP) que implica que la legislación y la reforma legislativo, que se lleva a término en relación directa con sus intereses. El caso más claro, y al mismo tiempo básico, es el de la Constitución [...].

[Como conclusión] a través del parlamentarismo y de la participación en los canales propios de la democracia burguesa no se pueden conseguir cambios sustanciales en la vida colectiva y social. Un movimiento como el nuestro, [...] que tiene una forma propia de funcionar y de organizarse lejos de la estructura organizativa de los partidos políticos – pilares de la democracia burguesa –, queda inmediatamente marginado por el propio sistema y en un área de fácil represión ‘legal’”.

Por último, una responsabilidad importante de todo este proceso, la tenían los partidos de la izquierda parlamentaria. Tanto el PSOE como el PCE, focalizaron gran parte de las críticas de los antimilitaristas. Por una parte, porque entendían que su único objetivo durante el proceso de cambio fue conseguir su legalización y consolidarse en el nuevo sistema de partidos en la mejor posición de fuerza posible. Sin que tuvieran problema alguno a la hora de

hacer renuncias a sus tradiciones ideológicas y de acción política. Como resumía Òscar García i Jané, uno de los principales activistas del movimiento antimilitarista hasta la década de los noventa:

“[El sistema que s’està consolidant a l’Estat espanyol és el de la] democràcia controlada (també dita estatisme autoritari, democràcia feixista, etc.) [...] i quina fou la resposta de l’oposició democràtica a totes aquestes maniobres? La d’anar afluixant progressivament fins acceptar en la pràctica l’operació de la Reforma. Només cal recordar el rebaixament de termes que per aquells mesos l’oposició realitzà: ruptura – ruptura pactada – ruptura negociada – reforma. I d’aquesta manera la burgesia espanyola anà ficant gols a uns jugadors que, autoprocament-se l’avantguarda del poble i dels treballadors, els preocupava més l’aconseguir la seva legalització i uns certs espais de poder que el no permetre la integració i la decapitació de les lluites i, per tant, en desestabilitzar una democràcia que, en realitat, no era (ni és) més que l’expressió política de la reacomodació del poder capitalista a les noves necessitats [...]”.

Los antimilitaristas consideraban como una de las consecuencias del “acomodo” de los partidos parlamentarios de izquierda, había supuesto una ancla para la movilización social en momentos clave del proceso de transición, ya que estos partidos se decantaron por la desmovilización. Además, entendían que estos partidos también habían logrado captar una parte importante de la población políticamente activa, lo que significó la pérdida de estas personas para causas revolucionarias mayores, ya que esta captación significó a su vez una mayor legitimidad para el nuevo sistema político. Desde esta perspectiva se criticaba especialmente al PSOE, del cual no se esperaba gran cosa tras su victoria electoral en 1982, considerando incluso que sus políticas afectarían negativamente a la clase trabajadora. El mismo Òscar García i Jané, lo resumía en un artículo titulado “Ave Felipe, los antimilitaristas ¿Te saludan?”:

“Resulta claro que el papel asignado a la izquierda reinante [PSOE] consistirá en frenar las luchas sociales mediante una singular combinación de consenso y represión, en donde el acento esté puesto en el primer elemento. Se tratará, entonces, de legalizar aquellas reivindicaciones ya impuestas en la calle por los movimientos sociales al mismo tiempo que se les neutraliza ideológica y organizativamente. Todo ello

complementado (¡faltaría más!) con la represión pura y dura hacia los sectores ‘extremistas.

Para el bloque social dominante la ventaja de organizaciones de este tipo frente a los partidos burgueses tradicionales radica sobre todo en su mayor control de la población trabajadora en épocas de agitación social. Recordemos si no que una parte de los sindicatos, de las AAVV, de los grupos y entidades en general, navegan en su órbita. Si a esto le añadimos la identificación aparente de su discurso ideológico, así como incluso de su historia con las ideas y vicisitudes por las que han luchado y transcurrido la clase trabajadora, comprenderemos la gran capacidad que poseen los llamados partidos obreros para sujetar las luchas sociales.

Es evidente que el programa psocialista [sic] es de una tibieza exagerada [...] Su política económica buscará simplemente hacer más competitivo el capitalismo español, potenciando los sectores más dinámicos del capital. Para ello proseguirá con la reestructuración y decenas de miles de trabajadores irán de patitas a la calle”.

La frustración de los antimilitaristas sobre los resultados del proceso de cambio democrático la reflejaba perfectamente Mario Vila desde la sección “Ruedo Ibérico” de *La Puça i el General*: “[...], con los socialistas en el Gobierno el sistema de partidos vigente en este país ha dado ya de sí todo lo que podía por la izquierda”.

## EL MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA EN *COMBATE* COMO BASE PARA LA CRÍTICA A LA TRANSICIÓN

Aránzazu SARRÍA BUIL  
Université Bordeaux Montaigne

### **Resumen :**

El debate en torno al mantenimiento de España en la Alianza Atlántica constituyó uno de los escenarios principales de la historia de la Transición en su dimensión internacional. El abordaje de esta cuestión permitió no obstante una reflexión más amplia en el seno de la oposición política, quedando en ella cristalizadas las tensiones entre la izquierda parlamentaria y la izquierda radical. Este trabajo analiza los argumentos que sobre el tema avanzó la publicación *Combate*, órgano de prensa de la Liga Comunista Revolucionaria, entre 1980 y 1986. Entre la protesta por la ofensiva armamentista norteamericana, el temor a las amenazas golpistas contra las libertades democráticas y el rechazo al uso de la energía nuclear, *Combate* fue construyendo un discurso en el que el posicionamiento antimilitarista funcionaba como recurso para cuestionar los fundamentos mismos del sistema transicional.

Para todo aquel interesado en la historia de la izquierda del siglo XX, resulta una evidencia reconocer el papel que desempeñan los órganos de prensa en el conocimiento de la trayectoria de partidos u organizaciones políticas o sindicales, tanto más si atraviesan períodos de clandestinidad durante los cuales la capacidad de expresión escrita se convierte en sinónimo de resistencia. Esta afirmación es confirmada por quien se acerca al estudio de una organización de la izquierda radical como la LCR cuya historia —como señalara Miguel Romero, uno de sus más carismáticos fundadores— se funde con la de su periódico *Combate* (1971-1991). Sin duda en él quedan recogidas las ideas que nutrieron la vida de la organización así como los objetivos sobre los que se cimentaron las estrategias adoptadas o las diferentes expresiones que con el tiempo fue adquiriendo la lucha militante.

Por su duración y regularidad a lo largo del decisivo período que abarca, esta publicación ofrece más que una lectura de la evolución interna de la LCR. Su contenido permite asimismo iluminar escenarios políticos y sociales que han quedado ensombrecidos por la propia historia del proceso de construcción democrática en la medida en que las propuestas, reivindicaciones o movilizaciones que llenaron dichos escenarios se saldaron, como sabemos, por una derrota política. El análisis político de la situación de entonces y los retos asumidos por esa militancia ofrecen, no obstante, elementos de innegable valor para el conocimiento de aquellos años. Tal es el caso del debate en torno al mantenimiento de España en la Alianza Atlántica que agitó a la sociedad de los primeros ochenta y que constituye, con la campaña del referéndum del 12 de marzo de 1986 como punto álgido, uno de los episodios determinantes de la Transición democrática en clave internacional. En realidad la cuestión de la entrada de España en la OTAN fue un proceso que muestra hasta qué punto el factor exterior, además de ser uno de los cursores que pautó las directrices de la política nacional, propició un pulso en el seno de la izquierda entre dos concepciones del proceso democrático en ciernes. En los adjetivos parlamentaria y radical quedaron cristalizadas las diferentes culturas políticas de la izquierda presentes en el escenario postfranquista así como sus correlativos vínculos entre ideología, discurso político y movilización social.

Considerando dicho debate como escenario de reflexión en el seno de la oposición de izquierda, en esta presentación me planteo adentrarme en las posiciones y argumentos avanzados por el periódico *Combate* en el período que se extiende de 1980 a 1986. Entre la

El movimiento antimilitarista en *Combate* como base para la crítica a la Transición protesta por la ofensiva armamentista norteamericana, el rechazo al uso de la energía nuclear y el temor por las amenazas golpistas contra las libertades democráticas, la LRC propone toda una crítica del proceso de transición hacia la democracia a la luz de las decisiones tomadas en materia de política exterior.

### *Las múltiples caras del antiimperialismo*

La oposición a la entrada en la OTAN, la llamada a la movilización contra el mantenimiento de las bases americanas en territorio español y la exigencia de la convocatoria de un referéndum constituyen los pilares del temprano posicionamiento de la LCR expresado en las páginas de *Combate*. Sin duda, la marcha de Madrid a Torrejón del 25 de enero de 1981 —la primera de una serie de iniciativas destinadas a impedir que el gobierno de la UCD llevara a cabo la entrada de España en la Alianza Atlántica y negociara la renovación del acuerdo bilateral con los EEUU— representa el pistoletazo de salida de una larga campaña de información militante destinada a cubrir la estrategia defendida de la acción en la calle. De manera indisociable, el tratamiento de la política exterior constituye una preocupación omnipresente en este órgano de prensa, que cuenta con una pluralidad de espacios en los que desplegar una concepción de la lucha contra el imperialismo en todas sus formas: portada, editoriales, sección política, sección internacional dan cabida a un antiamericanismo que define y forma parte de los rasgos de identidad de la publicación. Heredero directo de la posición adoptada por los partidos de izquierda desde el inicio de la Guerra Fría, ese sentimiento antiamericano experimenta un impulso en los ochenta ante la política de rearme desarrollada por la administración Reagan. Un rechazo rotundo de la política estadounidense que desde la redacción del periódico no es incompatible ni con una marcada distancia respecto de las políticas del Pacto de Varsovia, ni con el sueño socialdemócrata de una Europa independiente basada en un neutralismo armado (nº249, nov.1981).

En el marco de una línea editorial solidaria con las luchas revolucionarias protagonizadas por el entonces denominado “tercer mundo”, *Combate* no solo denuncia la política de intervención militar de los EEUU en América central, Oriente Medio y el Caribe,

sino que apuesta por la convergencia entre diferentes formas de protesta presentes en el ámbito internacional, con objeto de hacerse eco de lo que considera una creciente resistencia a la ofensiva militarista del capitalismo. Movimientos de liberación nacional, organizaciones pacifistas, asociaciones de trabajadores y grupos antinucleares componen los diferentes componentes de un frente común contra un imperialismo cuyo rostro adquiere una diversidad de formas: desde la carrera armamentística hasta la amenaza de guerra mundial, pasando por programas de austeridad y peligro de destrucción nuclear (nº247, oct/nov. 1981). Bajo esta óptica deben leerse los numerosos artículos dedicados a explicar la militarización de la economía (nº266, abril 1982; nº273, junio 1982), a mostrar el "negocio descarado" que supone la guerra (nº249, nov. 1981; nº269, mayo 1982) y a denunciar su desarrollo como una etapa esencial de la ofensiva de austeridad del capital y como marco de lectura en el que quedaban inscritas las relaciones entre países exportadores de armas y regiones del tercer mundo importadoras de las mismas.

La historia de España contribuye a esta visión mundial proporcionando su propio acontecimiento. El golpe de Estado del 23F constituye un momento clave en la construcción del discurso que aúna el pasado de la LCR en su lucha antifranquista y el presente crítico hacia la representación parlamentaria de la democracia española con el rechazo de la política norteamericana y de sus intereses en el mundo defendidos mediante el mantenimiento de regímenes dictatoriales. Así, la visita a España el 8 y 9 de abril de 1981 del secretario de Estado norteamericano Alexander Haig es una ocasión para asociar el combate contra la entrada en la OTAN con la lucha contra el golpismo, considerado como un chantaje político (nº225, marzo/abril 1981). En adelante, las noticias dedicadas al estado de las movilizaciones en la calle apelan a la libertad amenazada que se incorpora al discurso militante como un llamamiento reivindicativo más:

Los trabajadores y los pueblos del Estado español no pueden aislar la lucha contra la OTAN de la enérgica defensa de las libertades frente a cualquier intento de volver a la noche de la dictadura.[...] hay que impedir la nueva escalada golpista, hay que mantenerse alerta frente a cualquier nuevo pacto entre los llamados "poderes fácticos" y partidos como AP y UCD, que supondría un nuevo paso adelante en la consolidación de esa "contrarreforma" que venimos sufriendo desde el 23-F. (nº249, nov. 1981)

En la denuncia de la política desencadenada por el intento de golpe de Estado fallido quedaba legitimado el uso del añadido “El golpismo no pasará” al tradicional lema “¡OTAN no, Bases fuera!”. La lucha contra la ocupación militar de una parte del territorio español era así asociada al recuerdo de lo que había sido la resistencia contra el fascismo. Coincidencia del calendario, la adhesión oficial a la OTAN firmada por el gobierno de la UCD el 5 de junio de 1982 compartía actualidad no solo con una visita a Europa de presidente Reagan sino también con la publicación de las sentencias en el juicio del 23F, lo que favoreció que en la marcha organizada en diferentes puntos del territorio nacional la protesta contra la Alianza y el golpismo compartieran el protagonismo de las movilizaciones: la exigencia de un castigo ejemplar contra los golpistas y la determinación antimilitarista reflejada en el lema “antes para no entrar y ahora para salir” (nº272, mayo 1982, 273, 274, 270).

En esa misma primavera la guerra de las Malvinas ofrecía un nuevo escenario para la denuncia de políticas de ocupación basadas en la supremacía militar. De Reagan a Thatcher, la nueva crisis internacional reafirmaba la posición antiimperialista de la izquierda revolucionaria para denunciar la política exterior española, por considerarla tributaria de la política beligerante de la OTAN y condicionada por sus deseos de entrada en el Mercado Común. El antiimperialismo de la LCR era trasladado a la cuestión de Gibraltar, Ceuta y Melilla, lo que le permitía distanciarse asimismo de las posiciones de los partidos de la izquierda parlamentaria demandantes de garantías para el mantenimiento y soberanía sobre estos territorios (nº270, mayo 1982, 271, 297).

Sin duda es en el contexto de tensión creado por la crisis de los euromisiles y, sobre todo, tras la ofensiva del despliegue de armas nucleares de alcance medio (misiles Pershing y Cruise) a partir del otoño de 1983, donde el internacionalismo propio de la LCR encuentra un nuevo impulso al conectar con las reivindicaciones y formas de lucha de un movimiento pacifista reemergente a escala planetaria. Y es que en el discurso contra el belicismo de los EEUU y la amenaza de un conflicto nuclear limitado a Europa, el partido refuerza la necesidad de inscribir su acción en el seno del movimiento europeo contra la guerra del que se considera portador. Las páginas de *Combate* ejemplifican la articulación del llamamiento a la solidaridad internacionalista con luchas revolucionarias de liberación –expresadas en el apoyo



a El Salvador o Nicaragua (nº249, nov. 1981)— con la apuesta por el pacifismo como eje vertebrador de la movilización de masas. Una línea política que responde al esfuerzo de clarificación desde el que reconsiderar lo que constituían debates que habían nutrido el pensamiento de la izquierda de los sesenta y setenta, esto es, el valor de la lucha armada como táctica política y el papel central del obrero como sujeto revolucionario. Si bien la denuncia de las políticas estatales favorables a gastos armamentísticos —extensible al uso de la energía nuclear— forma parte de un discurso político cuyo anticapitalismo permite la articulación con reivindicaciones históricas del movimiento obrero, el vínculo con el pacifismo consigue tener un alcance mayor pues sobrepasa, número tras número, los contornos de este actor del cambio. La apuesta por el movimiento por la paz responde al deseo de ampliar la base social de la protesta, dada su potencial capacidad de radicalización entre los jóvenes y por la dinámica creada con otros grupos (feministas, ecologistas), pero también porque se trataba de un activismo de difícil encaje tanto en el discurso como en el marco de las políticas reformistas defendidas por la socialdemocracia y el eurocomunismo donde las tensiones se habían hecho sentir en el seno de los principales partidos europeos.

Las entrevistas con el historiador británico Edward P. Thompson, militante por el desarme nuclear, y con Petra Kelly, diputada alemana del Partido Verde, por poner solo dos ejemplos, testimonian esta preocupación internacionalista de los militantes de la LCR y el interés por mantenerse conectados con la protesta surgida en otros países. Conviene igualmente destacar titulares como “No estamos solos en la lucha contra el rearme y por la paz”, donde *Combate* se hace eco de manifestaciones celebradas en diferentes capitales europeas —Göteborg, Viena, Hannover, Roma, Londres, París— pero también en Washington y Tokio. A través de su movimiento antiguerra, el caso español quedaba inserto en una dinámica de carácter internacional en la que no dejaba de ponerse de relieve la ausencia en estas convocatorias de la izquierda parlamentaria —socialistas y comunistas— de aquellos países y la participación de sus bases aún en contra de las direcciones de los partidos de filiación. El posicionamiento ante el rearme se convertía en síntoma de la brecha abierta entre militantes y cúpulas, dando cuenta de las contradicciones que el pacifismo había ocasionado en el discurso plural de la izquierda europea (nº273, junio 1982, 247).

El movimiento antimilitarista en *Combate* como base para la crítica a la Transición

De esta constatación dará cuenta la resolución sobre el movimiento antiguerra de junio 1983 emanada de la LCR, donde quedan anunciados los criterios que debían guiar la táctica de la organización y que le llevan a la necesidad de cambiar su forma de intervención. Se trataba de impulsar un movimiento lo más amplio posible que buscaba alcanzar la hegemonía en el seno de la izquierda, para lo que era necesario una implicación de sus militantes que iba más allá de la participación en los comités anti-OTAN creados en el 81. Para ello, se propone combinar “acciones ligadas con la situación concreta en cada momento” con “debates de fondo sobre las perspectivas del movimiento”. La lucha por la unidad seguía constituyendo la piedra de toque de una militancia basada en el principio de los frentes de acción, por lo que cuando la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP) se constituya en julio de 1983 reuniendo a más de cuarenta colectivos y asociaciones por la paz, el apoyo y la participación de la LCR en este nuevo instrumento de confrontación política y social serán incuestionables.

### *La unidad para la acción*

En el marco del antifranquismo y frente al sectarismo que caracterizaba a las prácticas de las organizaciones de la izquierda radical, la LCR se había desmarcado por una política favorable a la unidad de acción con otros grupos de la extrema izquierda cuyos límites –como señala Martí Caussa– eran definidos por diferencias de estrategia, el uso de la lucha armada y la participación en las plataformas de oposición democrática. En coherencia con esta línea debe entenderse la labor realizada en los primeros ochenta desde *Combate* en favor de una campaña tendente a conseguir la unidad de la izquierda, con un PSOE en la oposición y con aspiraciones al poder, cuando el precio de la vía reformista como referente político del pasado más inmediato ya era valorado en términos de desmovilización, lo que hacía tanto más necesaria y contundente la crítica:

Corresponde a la izquierda activa, a esos sectores que ya han sacado las lecciones de la transición y del porqué se vió frustrada la ruptura democrática, la tarea de responder al instinto de lucha y a la combatividad que vuelven a abrirse camino en las filas del

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017

movimiento obrero. [...] las distintas corrientes que coincidimos en esos objetivos debemos ir forjando frentes para la acción que ofrezcan una alternativa capaz de combatir el desencanto y el miedo. (nº270, mayo 1982)

Entre los objetivos a los que se alude en la cita se encontraban las tradicionales luchas de clase contra el paro y los despidos, el rechazo del centralismo en favor de los derechos de las nacionalidades y la defensa de las libertades democráticas, a los que se sumaba la reanudación de las acciones contra la permanencia de España en la OTAN. En efecto, en clave nacional, la convergencia en la acción que había constituido este movimiento a lo largo de su primer año de lucha se convierte en una experiencia de esperanza que contribuye a abrir un período nuevo para la izquierda radical. La legitimidad de la Comisión anti-OTAN se encontraba en el reconocimiento de un desfase entre la opinión de las fuerzas políticas mayoritarias representadas en el parlamento de un lado, y la opinión de un amplio sector de los ciudadanos y los movimientos sociales por otro (nº238, julio 1981). Lo que era interpretado como una fractura entre la izquierda parlamentaria y la izquierda revolucionaria constituía un capítulo más en el enfrentamiento que había opuesto al final de la dictadura a la LCR en su defensa de una ruptura con el régimen indisociable de la lucha contra el capitalismo, con respecto al bloque pactista integrado por el PCE y los grupos integrantes en la Junta Democrática. El atlantismo de la transición venía a prolongar, acentuándola, la fractura provocada por el pactismo en el seno de la lucha antifranquista, convirtiéndose en el nuevo cursor de los debates en el tablero de la izquierda.

El papel de *Combate* se revela esencial en tanto que espacio abierto al debate público, ofrecimiento de la LCR en pro de una renovación y ampliación de la izquierda revolucionaria, acorde con un esfuerzo de clarificación política y de unidad interna. Frente a los peligros que suponían la dispersión y el sectarismo consustanciales a esta militancia, la LCR aboga por la construcción de frentes unitarios en los que articular la lucha de una serie de fuerzas heterogéneas críticas con el proceso democrático y que incluían a partidos políticos (PCC, MC, LCR), corrientes nacionalistas radicales (Herri Batasuna, BNPG, Nacionalistes d'Esquerra), sindicatos y movimientos sociales como el antinuclear, el feminista o el vecinal (J. Pastor, nº273). En consecuencia, la propuesta de unidad que la LCR defiende en los primeros ochenta confirma lo que constituye una seña de identidad de la organización al

El movimiento antimilitarista en *Combate* como base para la crítica a la Transición tiempo que representa la aspiración a articular la acción de partidos políticos y movilizaciones sociales. Era precisamente la oportunidad perdida de un proceso de transición cuyo éxito reposaba en la capacidad de generar la dinámica contraria, esto es, disociar luchas políticas y dinámica social (Romero, 2014; Garcés, 2012).

A lo largo de la campaña contra la OTAN y tras el “otoño caliente” de 1983, el movimiento pacifista confirma su función de elemento vertebrador de la movilización ciudadana europea, y será en torno a él como se planteen los términos del debate sobre las posibles alianzas. Desde *Combate* la mirada está puesta en la confluencia con el movimiento obrero: “la estrategia a seguir es la de imponer la retirada de los misiles, la reducción de los gastos militares y la desnuclearización, de forma unilateral, mediante la acción de masas en el corazón del sistema capitalista: en las fábricas”. (C. Vela, n°337, marzo 1984). Numerosas y constantes son las llamadas a la unidad de la izquierda y a la movilización social desde las páginas del periódico, que insta a salir a la calle en cada ciudad y en cada pueblo, para después hacerse eco del ciclo de manifestaciones que cifra y describe en su diversidad – carreras, cadenas humanas, marchas, sentadas, charlas, mitines, festivales, etc.– conforme avanza la organización del movimiento pacifista (n°346, mayo 1984, 348, 364). Un avance que se hace cada vez más necesario a medida que la posición gubernamental, respondiendo al liderazgo de Felipe González y a su búsqueda de un consenso parlamentario, se desvela favorable al mantenimiento en la OTAN y reticente a la celebración de un referéndum, como una lógica que asocia a la entrada en el Mercado Común.

Al adquirir la forma de un enfrentamiento directo contra el gobierno, los redactores de *Combate* vaticinan una etapa más difícil para el movimiento por la paz debido a la política de desgaste y a la intoxicación informativa desplegadas desde el PSOE (J. Pastor, n°359), y alertan de la importancia de paliar con urgencia “la gran diferencia existente entre capacidad de movilización y convocatoria, y capacidad organizativa de las organizaciones pacifistas” (A. Flórez, n°364, diciembre 1984). En este sentido, frente al objetivo de las Mesas por el referéndum constituidas en el verano de 1984 para reclamar la celebración de un referéndum con carácter vinculante, la CEOP representaba un frente más amplio en su combate contra el militarismo. Si la multitudinaria marcha a Madrid del 3 de junio de 1984 (n°348, junio) y las manifestaciones pacifistas con ocasión de la visita oficial de Reagan a

España en mayo de 1985 (nº380) son consideradas como logros atribuidos a la CEOP en lo relativo a la participación ciudadana, la convocatoria del referéndum para el 12 de marzo es valorada como la primera conquista política del movimiento por la paz.

Ante lo que se considera como el resultado de un cálculo político por parte del presidente de gobierno, la LCR se posiciona a favor de una campaña electoral de masas cuyo objetivo es ganar el referéndum y para ello apuesta por una política de alianzas en torno a la CEOP –en el interior de la cual había desempeñado junto al MC un papel hegemónico–, en quien deposita el protagonismo y el contenido de la campaña, respetando las especificidades de los apoyos que pudieran tener lugar en cada nacionalidad o región (M. Garí, 403). La movilización y la contraargumentación fueron los otros pilares en los que se basó la campaña, como muestran los diferentes artículos publicados en la sección Primer Plano de *Combate*, que vuelve a una periodicidad quincenal a partir de diciembre de 1985. El pulso contra el gobierno entra en su recta final en 1986. Titulares como “Una campaña para ganar”, “Preparando la victoria” o “Las mentiras del sí”/“Las razones del no” del Especial OTAN del 15 de febrero, dan cuenta de la necesidad de contrarrestar tanto el control informativo de los medios de comunicación ejercido por el partido de gobierno como los efectos negativos que pudiera ocasionar la campaña paralela mantenida por la Plataforma Cívica liderada por el PCE. A una exigencia de claridad en la argumentación se suman las expectativas creadas por la confluencia entre el movimiento pacifista y otros sectores de la población de distintas sensibilidades como sindicatos, organizaciones juveniles, asociaciones vecinales y grupos feministas.

Ante la incógnita del resultado los dos escenarios posibles son analizados y en ambos sobresale el desafío de garantizar la continuidad del movimiento pacifista. Con la derrota del 12 de marzo la moral de victoria que había caracterizado el transcurso de la campaña en su recta final se convierte en una victoria moral, tal y como es valorada por el amenazante editorial “Nos veremos las caras”. Texto este que aparece precedido de una papeleta del No en la que se indicaban los siete millones de votos conseguidos (el 39,8%), expresión de lo que es interpretado como un triunfo político. Sin dejar de denunciar “la inmoralidad de los vencedores en las urnas”, fruto de la manipulación y del miedo de los que había hecho uso el gobierno socialista, *Combate* encaja el resultado desde la necesidad de reforzar el papel de la

El movimiento antimilitarista en *Combate* como base para la crítica a la Transición izquierda combativa. Rechazando considerar que esta podría ser la última batalla de la transición, afirma: “se trata de seguir luchando contra la OTAN y el militarismo, adaptándonos a las nuevas condiciones, pero manteniendo el carácter del movimiento, de masas, unitario, activo en la calle, organizado en colectivos de base y en los organismos centrales que los estructuran” (nº406, marzo 1986). Una declaración de intenciones que avalaba la política desarrollada por la LCR en los largos cinco años de campaña, al tiempo que intentaba ofrecer una línea de continuidad al recorrido de su militancia revolucionaria.

### *Conclusiones*

*Combate* es una fuente decisiva para conocer el tratamiento de la izquierda radical del contexto internacional de la Transición y un referente del pensamiento crítico en el debate que dividió a la sociedad española en el debate en torno a la OTAN. En tanto que órgano de prensa de la LCR la redacción de este periódico busca acercar a su militancia a las cuestiones de defensa y de política exterior abordadas en el marco de las preocupaciones de la lucha anticapitalista. Con el tiempo se convierte asimismo en vector de introducción de una cultura pacifista y en uno de los principales actores del proceso de ampliación de fuerzas sociales organizadas en el movimiento por la paz.

En efecto, la larga duración de la campaña contra la entrada primero y el mantenimiento después de España en la OTAN supone un período decisivo en la construcción de una alternativa revolucionaria en el seno de la LCR que responde a un doble esfuerzo de clarificación política y de unidad interna. A lo largo de sus páginas *Combate* elabora un discurso antimilitarista que reafirma su posicionamiento contra el imperialismo y se constituye en eje vertebrador de una lucha destinada a cuestionar los fundamentos mismos del sistema transicional y a responsabilizar a la izquierda parlamentaria de la brecha abierta entre clase política y direcciones de los partidos por un lado, y sectores militantes y bases sociales, por otro.

Entre el otoño de 1980 y marzo de 1986 el combate contra el atlantismo permitió articular una crítica a la política reformista de la transición en la que las posturas rupturistas

defendidas durante el final de la dictadura quedaban conectadas con la denuncia contra el golpismo tras el 23F, con el apoyo a los movimientos de liberación nacional y con las protestas antibelicistas y antinucleares surgidas en los países europeos como consecuencia de las políticas de rearme emprendidas en aquellos años. Una confluencia reivindicativa en el ámbito de la izquierda que prolonga el proceso de transición hasta la derrota del referéndum de la OTAN y sin la cual resulta difícil comprender el carácter y la trayectoria de las militancias radicales y de las luchas alternativas –anticapitalista, feminista o antimilitarista– que se han sucedido desde entonces.

## **PEDAGOGÍA EN MOVIMIENTO. LA EDUCACIÓN POPULAR MADRILEÑA**

Diego FERNÁNDEZ LOBATO

### **Resumen:**

El nacimiento de alternativas pedagógicas en barrios obreros y marginales de Madrid desde finales de los sesenta está directamente relacionado con el abandono de la población adulta analfabeta por parte del franquismo.

La lectura de Freire, Ferrer i Guardia y otras figuras relevantes de la pedagogía dialógica vertebraba los análisis y la puesta en práctica de unos colectivos unidos por el antifranquismo. Volcados en la creación de cultura popular y la politización de los barrios obreros, tuvieron que enfrentarse directamente con las instituciones locales, la Iglesia y los medios de comunicación para asegurar su propia supervivencia.

**Diego Fernández Lobato** es graduado en Historia y miembro de la Escuela Popular de Prosperidad. He participado en congresos nacionales e internacionales desde 2014. Trabajo principalmente sobre *Game Studies* y la cultura durante la Transición.



La pedagogía popular fue un movimiento nacido al calor de los sucesos de Mayo del 68 en una dictadura que había abandonado a la población analfabeta adulta. Y en la cual se iniciaba el ciclo de protestas que caracterizaría los años finales del franquismo.

En las siguientes páginas abordaré de forma sintética algunos elementos que permitan caracterizar las escuelas populares en su contexto histórico, así como establecer sus características principales a través de tres ejemplos concretos desarrollados en Madrid. Sin obviar que se trató de un fenómeno a nivel nacional, que tuvo una presencia significativa en la capital y Barcelona.

### *Pedagogía en movimiento, caracterización de las escuelas populares*

La aparición de las escuelas populares está estrechamente relacionada con el surgimiento de los movimientos vecinales en el extrarradio de las grandes ciudades. Zonas obreras, receptoras de inmigración rural y con carencias evidentes de servicios públicos básicos. Condiciones que catalizaron el descontento y las reivindicaciones políticas.

En estos lugares la ausencia de servicios esenciales significaba, por ejemplo, la falta de equipamientos educativos apropiados. Las carencias educativas de la población eran de una entidad considerable y se traducían en tasas de analfabetismo cercanas al 4% en 1970 en Madrid. En términos absolutos, esto eran aproximadamente 140.000 personas. Si tenemos en cuenta el sexo, se puede apreciar que, un 2% de los madrileños eran considerados analfabetos, mientras que para las mujeres la tasa alcanzaba el 7%. Y, si tenemos en cuenta la edad, podemos hablar de tasas inferiores al 2% para los menores de cuarenta años, 8.4% para edades comprendidas entre 40 y 60 años y, finalmente, algo más del 21% para los mayores de sesenta años. Estas son las medias de la ciudad. Si observamos las diferencias entre distritos veremos desigualdades mayores. Ocurre lo mismo si tomamos como referencia el nivel de estudios. En términos generales, el analfabetismo incidía especialmente en mujeres de mediana edad y un nivel socio-económico bajo.

Estos datos contrastan con los ofrecidos por el Estado. Desde el gobierno se decretaba

en 1968 el fin de las campañas estatales de alfabetización al haber descendido la tasa de analfabetismo nacional por debajo del 15%. En 1973, la Junta Nacional contra el Analfabetismo (JNA) daba por cumplidos sus objetivos. En base a un criterio válido pero engañoso. En esencia, la dictadura concluye que ha logrado sus objetivos en materia de analfabetismo al haber logrado la escolarización infantil completa durante ocho años consecutivos. Sin embargo esto no puede servir como indicador fiable, pues no sólo debe entenderse como parte de la propaganda desplegada por el régimen y basada en sus logros modernizadores de la sociedad española. Debe entenderse también como una estadística incompleta e interesada. Pues obvia una cuestión evidente: el abandono de las campañas de alfabetización y las carencia de infraestructuras educativas adecuadas a las necesidades de la población significan el abandono de una población que se considera marginal y que, de forma natural, será sustituida por otra formalmente alfabetada.

Estas carencias fomentan la marginación social y económica de la población. Pues el ser alfabeto se convierte en un requisito para poder acceder al mercado de trabajo y a una vida relativamente digna.

En esta tesitura aparecen las primeras escuelas populares en los barrios obreros. Puestas en marcha por estudiantes y militantes sin un patrón ideológico definido. Aunque existiese una fuerte presencia de anarquistas, comunistas y cristianos de base. Las protestas contra la dictadura y el interés que despierta la educación como espacio de lucha, sintetizada en las obras de autores como Paulo Freire, ayudan a que las iniciativas se materialicen y consoliden.

Por un lado, se busca dar respuesta a las carencias que sufre la población. Por otro, se busca la politización de la misma a través de la pedagogía popular. Aunque llegados a este punto se deba aclarar que, básicamente, existieron dos tendencias al respecto. Por un lado, la *escuela neutral*, que se puede relacionar con autores como Ferrer i Guardia o Freinet y que aboga por el desarrollo de destrezas intelectuales sin recurrir a la politización. Por otro, la *escuela directiva*, vinculada a las propuestas de Freire y que entiende que el aprendizaje debe pasar por la inclusión del educando en la vida política. No se puede establecer una relación directa entre el modelo de escuela y la ideología de los colectivos. Quizás porque no se puede hablar de colectivos ideológica y programáticamente homogéneos.

Al menos en el caso madrileño, que es en el que me centraré, no puedo hablar de esta cuestión, pues no he encontrado indicios que así lo puedan sugerir. Tampoco de la presencia de militantes pertenecientes a tendencias minoritarias dentro del comunismo o el anarquismo. Como digo, estas iniciativas aparecen como respuesta ante una situación concreta y en un contexto de consolidación del ciclo de luchas de mediados de los años setenta. Claramente con una vocación política que pasa por hacer realidad lo propuesto por Freire en su *Pedagogía del Oprimido*; hacer de la "*opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará*". Aplicable para las escuelas de adultos, pero que precisa de matización en el caso de las escuelas infantiles.

Esta idea se sintetiza en un panfleto de la Escuela Popular de Oporto en el que se señala que las carencias formativas en determinados sectores de la población contribuyen a su marginalidad en la medida que impiden o dificultan su comprensión del contexto, así como la adaptación o transformación del mismo. Nora Palmitano, en su tesis sobre la Escuela Popular de Prosperidad, señala otro de los elementos centrales del análisis y la práctica pedagógica aludiendo a la concepción que existe del Estado como poseedor de la hegemonía discursiva de las clases dominantes en el ámbito formativo, reproduciendo los mecanismos de dominación de las clases populares y la creación de una ideología propia de las clases populares, a través de la educación, que las empoderar.

Una de las primeras escuelas populares fue la de Palomeras Bajas. Se crea a finales de los años sesenta, en 1969, y es, dentro del movimiento de pedagogía popular, de las pocas enfocadas hacia la infancia. Se ubica en un barrio chabolista al abrigo de la parroquia local, que intercede por la escuela ante el Ministerio y logra la cesión de unos barracones donde se desarrollaran las actividades hasta su desaparición.

Esta experiencia se extiende a lo largo de la década de los setenta y sus participantes han plasmado su historia en una monografía que recoge buena parte de su historia. El análisis de ésta nos permite señalar algunas de las características principales de la pedagogía popular y de su implicación en las luchas sociales del momento.

En este caso nos encontramos ante un colectivo en el que los cristianos de base tiene un gran peso. Se trata de jóvenes universitarios pertenecientes a Acción Católica que se

acercan a la pedagogía popular por el desarrollo de la autonomía y capacidad crítica de monitores y educandos. Críticos con el capitalismo por las desigualdades que provoca y que gestionan de forma autónoma el local y sus actividades.

Al tratarse de una escuela infantil resulta complicado hablar de la politización del alumnado. Sin embargo, a través de la autogestión, se organizan redes de solidaridad y apoyo mutuo con las familias y el barrio. Redes recíprocas que buscan, en primer lugar, la mejora de las condiciones materiales en que se desarrollan las clases y la creación de tejido social en el entorno. Tomando las familias parte activa en la autogestión del centro a un nivel equiparable al de los monitores. En este proceso participaban también los educandos, haciéndose cargo de responsabilidades acordes a sus inquietudes y madurez.

Este funcionamiento hizo posible que el coste de la escolarización se mantuviera en unos niveles asumibles por las familias. Y fueran éstas las que encabezasen las peticiones de mejores instalaciones al Ministerio de Educación.

Pese a lo positivo de la relación entre monitores, educandos y familias, existieron roces en relación al modelo pedagógico aplicado. Antes de continuar con esta cuestión merece la pena señalar que respecto al concepto analfabeto existen distintas interpretaciones que varían en función de los parámetros que definen dicha condición.

Generalmente podemos hablar de *analfabetos* y *analfabetos funcionales*. Los primeros carecen de los conocimientos formales para producir y adquirir información por escrito. Los segundos poseen dicha capacidad formal, pero carecen de la formación necesaria como para desenvolverse correctamente en su entorno. Existen, como digo, distintas acepciones al respecto. Por otro lado querría señalar lo elaborado por Mercedes Rivas y Xabier Moreno en relación a los procesos de aprendizaje dada su importancia.

Los autores señalan la existencia de distintos tipos de personas alfabetizadas y, entre ellos, resaltan por un lado la *alfabetización funcional externa* y la *alfabetización funcional interna*, pues se encuentran en la base de la pedagogía popular. La primera asume la existencia de unos conocimientos básicos para el funcionamiento en sociedad, la segunda implica la adquisición de los mismos de forma autónoma. Como vemos, los propios autores lo señalan también, la definición de *persona alfabeto* es un tanto laxa y da pie a diversas interpretaciones. Aunque se puede, y sería interesante, debatir sobre la forma y contenido de

los conocimientos necesarios para considerar a una persona analfabeta o no.

Esencialmente, se puede hablar de que la concepción que prevalece en las escuelas populares sobre el concepto de analfabetismo se basa en la capacidad de análisis que posee el individuo sobre su entorno, así como su autonomía en él. Y, por otro lado, el desarrollo de su capacidad política.

En el caso de Palomeras Bajas las tensiones aparecen vinculadas al proceso formativo. Diferencias que los autores atribuyen a dos factores. Por un lado las diferencias apreciables en el desarrollo y capacidades del alumnado en comparación con el de escuelas tradicionales. Por otro, al diferente desarrollo crítico de monitores y familias. En otras palabras, la comparación de modelos educativos diferentes da pie a diferencias entre alumnos que son interpretadas como carencias que resultan de la aplicación del modelo de pedagogía popular. Sin embargo estas diferencias se deben a las habilidades trabajadas y estas no se pueden medir en comparando modelos que son completamente diferentes.

Pese a estas diferencias los principales problemas de la Escuela de Palomeras Bajas estarían directamente relacionados con el entorno marginal en el que se ubica el centro. Donde la drogadicción y la miseria incidieron de forma especial. Esta situación no ocurría en zonas de la ciudad.

Habitualmente se habla del desarrollo del movimiento vecinal en lugares como Carabanchel o Vallecas. Sin embargo en el caso de las escuelas populares uno de los referentes hay que buscarlo en el barrio de la Prosperidad.

En 1973 abrió sus puertas la Escuela Popular de Prosperidad. Uno de los espacios pedagógicos más conocidos y que a día de hoy continúa activo.

Al igual que ocurre en Palomeras, la Prospe, como se conoce cariñosamente al colectivo, nace al abrigo de la parroquia del barrio y es en ella donde desarrolla su actividad durante sus primeros años de vida. De la misma forma, sus impulsores son jóvenes universitarios y militantes de base. En este caso son los libertarios los que tienen mayor presencia, sin embargo el colectivo no se define ideológicamente.

A diferencia de lo que ocurre en Palomeras. La Prospe se enfoca hacia personas adultas que trabajan en el servicio doméstico en los barrios de Salamanca, el Viso o Hispanoamérica así como obreros manuales del pequeño núcleo industrial colindante con la

M-30.

La escuela se identifica con el modelo de *escuela directiva* y se plantea la autogestión como herramienta pedagógica y política. Se organiza de forma horizontal y autónoma. Y, al igual que en el caso anterior, buena parte de su historia está condicionada por la falta de locales propios.

Si en Palomeras Bajas la negociación se había realizado directamente con el Ministerio de Educación con un éxito relativo y, en cualquier caso, efímero, pues los barracones fueron destruidos en diversas ocasiones. En el caso de la Prospe no podemos hablar de un proceso análogo.

Señalaba que inicialmente se ubicó en la parroquia del barrio. A partir de 1977 y hasta 1981 se trasladó a un edificio que había servido de Escuela de Mandos de Falange y se encontraba abandonado en C/ Mantuano. Este edificio se ocupó por parte de distintos colectivos del barrio y se habilitó para el uso del vecindario. Como curiosidad, allí convivieron con artistas como Alaska, Almodovar o Aviador DRO.

Con la llegada a la alcaldía del PSOE, se reclama el edificio para dotar al barrio de un nuevo colegio público. Ante la negativa de la Prospe a abandonar el edificio, el Ayuntamiento toma medidas encaminadas a su desalojo y, por su parte, la escuela negocia con un colegio cercano la cesión de espacios. En 1981 se instala en C/ General Zabala y allí permanece hasta el año 2000. Se trataba de un edificio cuya propiedad dependía del Arzobispado y el Ayuntamiento de Madrid, al existir acuerdos de arrendamiento entre ambas instituciones. Con la llegada del PP a la alcaldía se inicia el proceso de desalojo de la Prospe, que durará casi diez años.

Esto debe entenderse como parte de un proceso más amplio de cambios en la estructura del barrio. La Prosperidad era en los años setenta un barrio obrero más de las afueras de la capital. La estabilización política posterior a la muerte de Franco y la ratificación de la Constitución en 1978, sumado al desarrollo de los servicios públicos a nivel nacional, la crisis y la transformación económica llevada a cabo por los gobiernos de Felipe González a partir de la década de los ochenta da paso a una nueva realidad. Miguel Martínez López lo define como el paso de barrios de "lata" o "cartón", por lo precario de su urbanismo y la pobreza de sus habitantes, a otros compuestos por las llamadas clases medias y altas urbanas.

Esto afecta a los movimientos vecinales y da paso a nuevas movilizaciones sociales con unas características propias definidas. Este no es lugar para desarrollar este punto, aunque ello no me impide destacar que en este momento se produce un primer relevo generacional en las escuelas populares. En el que se transforman las reivindicaciones y las acciones políticas.

Sea como fuere, la falta de locales propios donde desarrollar las actividades sería uno de los elementos principales que permiten explicar a las escuelas populares. En el caso de la Prospe, define su trayectoria de la misma manera que lo hace su trabajo pedagógico o político.

En la escuela de Prosperidad se pone en práctica la metodología propuesta por autores como Freire, Illich o Freinet. Pero la formación se enfoca, en un primer momento, en dos direcciones muy concretas que organizan la estructura del colectivo. Por un lado se encuentran los cursos de alfabetización, enfocados a la adquisición de las habilidades básicas de los educandos. Éstos se imparten de forma ininterrumpida hasta los años noventa. Pero, a mediados de los ochenta, se decide iniciar los cursos de Graduado Escolar, dada su necesidad para el acceso al mercado de trabajo. Estos dos cursos centran la actividad de la escuela hasta, como digo, los noventa. Momento en el que la llegada de inmigrantes africanos y del este europeo hace que se incluyan cursos de castellano en las actividades de la Escuela.

Llegados a este punto quisiera señalar un par de cuestiones. La primera es que la organización de los colectivos y de sus actividades se adapta a las circunstancias concretas de cada momento. La segunda es que estas actividades se enmarcan en un intento de organización municipal de los distintos colectivos.

Las primeras iniciativas de unión surgen a finales de los setenta. Sin embargo no logran estabilizarse y terminan por desaparecer por la diversidad de colectivos, objetivos y prioridades distintas existentes. Las distintas iniciativas por lograr una federación de escuelas populares buscaban cooperar y definir estrategias de acción conjuntas. A nivel estatal y local. Debido a la existencia en su seno de colectivos e intereses heterogéneos, muchas de ellas fracasan al cabo de poco tiempo. Sin embargo a mediados de los ochenta nace la FEPAM (Federación de Escuelas Populares de Personas Adultas de Madrid), una de las más estables y relevantes. En medio de los debates entre institucionalización y desarrollo de los objetivos pedagógicos. Durante los cuales una parte significativa de las organizaciones decide

institucionalizarse siguiendo el modelo llevado a cabo en Catalunya.

La institucionalización se abordó de distinta manera según los colectivos. Pero de forma sencilla se puede diferenciar entre los que entendieron que ajustarse a unos requisitos legales les permitiría ganar autonomía y abría la posibilidad de obtener financiación y de otorgar certificados de estudios, como es el caso de la Prospe, y aquellas que entendieron que podía significar la continuidad de sus actividades y una opción profesional válida, como ocurrió en Catalunya. La Prospe logra ser reconocida legalmente por el Estado. A mediados de los ochenta se logra el reconocimiento del Centro Nacional de Enseñanza Básica a Distancia (CENEBAD) y del Ministerio de Educación (1984). Fruto de este reconocimiento llegarían subvenciones y premios que reforzarían la legitimidad del colectivo. Así como movilizaciones que siguen los parámetros habituales de visibilización, concienciación y denuncia de la situación. En el caso concreto de la Prospe, esto se llevó a cabo a partir de festivales de música organizados *ad hoc*, campañas de propaganda centradas en un eslogan: "la Prospe resiste". Y, finalmente, manifestaciones como la llevada a cabo en Noviembre de 1999 desde el barrio de La Prosperidad hasta la Almudena, en donde se habían encerrado varias personas del colectivo.

Estas estrategias no son exclusivas de la Prospe. La escuela de Pueblo de Vallecas recurriría a herramientas similares, aunque sus resultados no fueran tan satisfactorios como los de la primera. En su caso, la lucha por el local se desarrolla entre 2002 y 2005.

En Pueblo de Vallecas se había iniciado la escuela, formalmente, a mediados de los ochenta, aunque ya existía una experiencia previa que sirvió como punto de partida. Este colectivo es un reflejo de la realidad de las escuelas populares. En la que la mujer encuentra un espacio de socialización y empoderamiento, que es percibido por los hombres como hostil. El rechazo a la pedagogía popular no se debe únicamente a lo inusual de sus propuestas, tiene mucha importancia el papel que tiene el varón como sujeto que sustenta a la familia. El cual entiende lo femenino como un espacio de vulnerabilidad de cara a sus semejantes. A ello ha contribuido, sin atisbo de duda, la educación machista recibida durante su infancia. Pero no únicamente, pues se percibe la escuela como un espacio en el que se igualan a la mujer. Algo que resulta evidente cuando se analizan las cifras de alumnos en relación a su sexo. En todos los casos vistos, se observa que la inmensa mayoría, e incluso la totalidad, del alumnado lo



componen mujeres de mediana edad. En documentación presente en el Archivo de la escuela del Pueblo de Vallecas se recogen datos estadísticos que dan fe de esta situación. Por su parte, en la Prospe señalan la alusión que realizan los alumnos varones a la presión social que sienten al acudir a espacios educativos para adultos por parte de su entorno cercano, entendiéndolo que puede explicar los motivos por los cuales se da esta situación.

A día de hoy este colectivo continúa en marcha. Sin embargo su evolución se ha caracterizado por la falta de relevo generacional y la ausencia de un espacio apropiado en el cual desarrollar sus actividades. Pese a estas circunstancias, es un lugar de formación y socialización.

### *Conclusiones*

Las escuelas populares surgieron en los momentos previos a la muerte de Franco para dar respuesta a las necesidades de la población marginada de las grandes ciudades. Como colectivo ha de entenderse desde la diversidad interna, existiendo distintos grupos trabajando por la creación de una cultura popular crítica y no por el adoctrinamiento político.

Su evolución está condicionada esencialmente por su posición de vulnerabilidad respecto del Estado y la adaptación a los nuevos contextos sociales. Fruto de ambos condicionantes nacen iniciativas de federación y de organización conjunta de estrategias.

A partir de los años noventa la realidad se transforma con la llegada de inmigrantes africanos y del este europeo. Las escuelas se adaptan a esta nueva circunstancia y se orientan, por un lado, hacia la integración de la población migrante mediante cursos de castellano. Y, por otro, a la consolidación de sus actividades habituales y la apertura de nuevos campos de lucha estrechamente relacionados con el movimiento antiglobalización. Se produce un relevo generacional en los colectivos. Aunque buena parte de ellos desaparecen. En general se puede hablar de un descenso del número de participantes a partir de dicho momento y especialmente desde la llegada de nuevo milenio.

Por último. Se deben analizar en relación a su contexto histórico, sus referentes ideológicos y metodológicos y la evolución de los mismos.

## LA LUCHA DE LA ESCUELA SÓLLER

Javier MORRÁS PITILLAS

### **Resumen:**

La experiencia de la Escuela Sóller, dentro del movimiento de Escuelas en Lucha es un ejemplo de una lucha autónoma y auto-gestionada con la implicación de todo un barrio por conseguir una escuela pública desarrollada en el barrio de Porta de Barcelona entre los años 1976 y 1979. La asamblea como órgano decisorio, la acción como elemento previo a la negociación y la capacidad de desbordar las propuestas de la administración, llevan a la consecución de una escuela totalmente participativa con una gestión conjunta de padres, maestros vecinos y alumnos y con el objetivo de transformar el sistema educativo.

**Javier Morrás Pitillas** es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra (1973). Ha trabajado diecisiete años como maestro, quince de ellos en la escuela estatal, y veinte en la enseñanza secundaria como profesor de historia. Fue profesor en la Escuela Tramuntana del Barrio del Carmelo, participó en la lucha por la consecución de una escuela pública el año 1975 y fue miembro de la asociación de vecinos del barrio de Porta y profesor durante tres años en la Escuela Soller, participé en todo el proceso de Escuelas en Lucha entre los años 1976 y 1979. Es coautor del libro *Escuelas en Lucha*, “Col·lectiu Caps de Setmana” Paideia 1978.

## *Introducción*

La experiencia de la Escuela Sóller se sitúa en la encrucijada de dos elementos importantísimos que se dan en Barcelona y en muchas otras ciudades del estado español entre el final del franquismo y los años de la transición: las luchas de barrio promovidas por movimientos vecinales y, en concreto, por las asociaciones de vecinos y los fuertes movimientos que se dan en el marco de la enseñanza tanto estatal como privada. Muchas de estas luchas adquieren, al menos en Barcelona, unas características basadas en la auto-organización, el poder decisorio de las asambleas y predominio de la acción por delante de la negociación.

Las luchas vecinales se generalizan al final del franquismo en la mayoría de barrios de inmigración de Barcelona, debido a la confluencia de dos factores. De un lado, las condiciones en las que se ven obligados a vivir como consecuencia de la manera en que se han creado estos barrios: construcciones rápidas, de mala calidad, bloques de viviendas con deficiencias estructurales, sin las infraestructuras necesarias, como asfaltado, semáforos, saneamientos en condiciones, falta de espacios verdes, equipamientos de todo tipo, como escuelas, centros de salud; en definitiva, barrios dormitorio fruto de una especulación urbanística.

Por otro lado, las luchas contra el régimen, que habían tenido un marcado carácter fabril y universitario, confluyen en estos años en los barrios, planteando una lucha más global, pero centrada en los problemas concretos que afectan a las clases populares. La mayoría de partidos y organizaciones de izquierda y extrema izquierda confluyen en los barrios obreros creando asociaciones de vecinos o integrándose en diversos colectivos y, sin abandonar del todo la clandestinidad propia de la época anterior, inician unos procesos más abiertos en contacto con los vecinos de los barrios.

Así comienzan a plantearse una serie de luchas que, si bien tienen como base reivindicaciones muy concretas, como luchas por un asfaltado, un semáforo o una escuela, adquieren un carácter de radicalidad y unas formas participativas basadas en las asambleas, que a veces sobrepasan a las propias organizaciones que las han impulsado.

La situación de la enseñanza a comienzos de la década de los setenta en España, y en particular en los barrios y áreas suburbanas, es realmente caótica:

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017

En la provincia de Barcelona, la enseñanza privada supera claramente en importancia a la estatal: la triplica en número de centros y casi la dobla en número de alumnos.

Al margen de la enseñanza religiosa y de algunos colegios laicos de élite que se ubican mayoritariamente en la zona rica de las ciudades, se trata de una enseñanza fuertemente degradada, ubicada en locales inadecuados, en muchos casos pisos o bajeras mal iluminadas, sin ningún tipo de condiciones y con un profesorado super-explotado y mal pagado, en algunos casos sin titulación, y que ni siquiera puede acceder a solicitar subvenciones, con lo que tiene que cobrar a los alumnos unos precios fuera del alcance de muchas familias obreras.

La enseñanza estatal es totalmente insuficiente en los barrios y poblaciones periféricas. En los pocos centros que existen se concentra un profesorado de edad avanzada, debido al sistema de provisión de plazas; las aulas están masificadas con 40, 50 y más alumnos por clase, donde se cobran “permanencias”, una cuota que se permite cobrar a los maestros por una hora complementaria y que hace que la enseñanza deje de ser gratuita además de mantener la masificación (cuantos más alumnos más dinero). Una enseñanza autoritaria y tradicional, heredera del régimen franquista y con poca o nula participación de los padres.

Toda esta situación da lugar a una fuerte conflictividad durante estos años. Por un lado, se suceden las huelgas tanto en la privada como en la estatal, en esta sobre todo entre el personal interino. Destacan la huelga de la enseñanza privada de febrero de 1976 y la huelga de PNN e interinos de febrero de 1978. A las reivindicaciones salariales se unen objetivos de más calado como la lucha contra las “permanencias”, el boicot al sistema de oposiciones, la reivindicación de un contrato laboral, la gestión de la enseñanza, la escuela única y la gratuidad total. Todo esto provoca un cierto acercamiento entre los intereses del profesorado y el de los padres, que desembocará, en algunos casos, en luchas conjuntas. A través de estas luchas se va conformando una estructura organizativa basada en las asambleas de zona con un carácter totalmente horizontal y anti-jerárquico que, a la larga, creará fuertes conflictos con los partidos y sindicatos de izquierda.

Por otro lado, en algunos barrios como el Besós, Carmelo, Nou Barris o Santa Coloma, se suceden movimientos reivindicativos que unen a padres, vecinos y enseñantes en

unos objetivos hacia la escuela pública, ya sea para conseguir nuevas escuelas o institutos como para pasar de privadas a públicas. Estos movimientos van conformando unas propuestas que estarán en la base de todos los movimientos posteriores de la Escuela Pública: Gratuidad total, Reducción del número de alumnos por aula, Calidad de la enseñanza y Control de la escuela por parte de la comunidad educativa, que en muchos casos se concreta en la elección del profesorado por parte de esta y el mantenimiento de una línea educativa en consonancia con los intereses del barrio donde está ubicada.

### *La lucha del barrio de Porta por conseguir una escuela.*

#### Situación del barrio de Porta

El barrio de Porta, incluido actualmente en el distrito de Nou Barris, era, al comienzo de los años setenta, un barrio en construcción; formado en el interior de una serie de ejes viarios, era un conglomerado de bloques de viviendas, construidas en su mayoría entre 1957 y 1966, muchas de ellas de mala calidad, en medio de descampados, terrenos industriales y viviendas de autoconstrucción. Presentaba gravísimos problemas de infraestructuras: calles sin asfaltar, deficiente servicio de alcantarillado, falta de semáforos, etc. Y, sobre todo, una falta absoluta de servicios de todo tipo entre los que destacan, de manera muy especial, la inexistencia de centros escolares de carácter público, lo que con una población estimada de 30.000 habitantes, 5.000 de ellos en edad escolar, suponía un gravísimo problema.

#### La asociación de vecinos

La asociación de vecinos, creada en 1974 ante la enorme problemática que presenta el barrio, realiza desde el principio una fuerte actividad enfocada en tres sentidos: la concienciación de los vecinos a través de los boletines de la asociación que se reparten entre los cerca de mil socios con los que cuenta, la participación mediante la convocatoria de asambleas para tratar los problemas que se plantean en el barrio y la elección de unos objetivos claros por conseguir, que se concretan en urbanizar el barrio (asfaltado, semáforos y plazas), y conseguir una escuela nacional. Otros objetivos, como poder contar con un hospital o un instituto, son asumidos como algo que hay que conseguir en coordinación con el resto de barrios periféricos.

## La lucha de la escuela Soller

Es el tema de la enseñanza el más urgente y donde se realizan los mayores esfuerzos, tanto a nivel de propaganda como de contacto directo con los vecinos, con reuniones y encuestas que se hacen casa por casa para hacer visible el verdadero problema de un barrio sin plazas de escuela nacional y con una enseñanza privada cara y de la peor calidad posible.

### La lucha por la escuela

Existía en el barrio un terreno que en principio estaba destinado a construir una escuela, pero la falta de voluntad de la administración hacía temer que en él se construyeran más viviendas. En mayo de 1976 la asociación de vecinos convoca una asamblea en la que se presentan las gestiones iniciadas de cara a la consecución de la escuela y una lista de unos cuatrocientos niños apuntados para matricularse en la nueva escuela. Esta asamblea, a la que asisten unos trescientos vecinos, significa el punto de partida de la lucha.

Se crea una comisión de padres y vecinos para la creación de la futura escuela. A partir de este momento, esta comisión se encarga de mantener todos los contactos oficiales (por el momento sin resultados). El ayuntamiento promete activar la construcción y apunta a una solución provisional para el curso siguiente. Estas promesas no se concretan en hechos y se avecina el comienzo de curso sin que se vea una solución siquiera provisional.

En septiembre se inician las movilizaciones. A partir de este momento, es la asamblea la que tomará el protagonismo, bien recibiendo en el barrio a los representantes municipales, bien desplazándose al Ayuntamiento o Delegación del Ministerio a presionar en las negociaciones. A la vez se inician manifestaciones en el barrio que, si bien al principio no son muy numerosas, poco a poco van incorporando nuevos vecinos a la lucha.

El día 30 de ese mismo mes, la asamblea, en número de 150 personas según la prensa, se desplaza al Ayuntamiento y, ante la ausencia del delegado de cultura Sr. Bassols, irrumpe en la capilla de Sta. Ágata donde se está celebrando la boda de un hijo del alcalde Sr. Viola. Los manifestantes son recibidos por Bassols en el salón del Tinell. Se exige comenzar las clases en unos locales provisionales para el 1 de noviembre y la construcción de la escuela para el siguiente curso 1977-78. Paralelamente, un grupo de ocho maestros identificados con la lucha comienzan a preparar el inicio de curso.

Ante la pasividad oficial, la asamblea decide ocupar unos locales propiedad del principal constructor del barrio; el 2 de noviembre, después de una manifestación, se fuerzan los locales y se ocupan. Al día siguiente comienzan las clases con unos sesenta alumnos de preescolar y E.G.B.

Se concreta la primera tabla reivindicativa: Exigir el acondicionamiento y alquiler de los locales, que sean reconocidos como escuela nacional, gratuidad total, aceptación por parte del M.E.C. de los maestros elegidos por la asamblea y construcción de una escuela de 16 unidades para el siguiente curso.

El Ayuntamiento comienza a tomar en serio el tema: alquila y acondiciona los locales ocupados y gestiona ante la Delegación de Enseñanza la legalización de la escuela como “Escuela Graduada Mixta Sóller”.

En enero, una vez acondicionada la escuela y reconocida por el Ministerio, este nombra cuatro maestros de oficio que son rechazados por los padres.

Nueve días de manifestaciones y cortes de tráfico en las vías adyacentes al barrio, y una concentración con intento de ocupación de Delegación, consiguen que estos nombramientos sean anulados y que se nombre en su lugar a cuatro de los ocho maestros que estaban trabajando desde noviembre.

El asunto de la elección de maestros es y será en adelante el punto más duro de las negociaciones, ya que el Estado no está dispuesto a ceder el control de la escuela. Provisionalmente se ofrece una trampa legal que permite que, sin cambiar la legalidad, de hecho sean los maestros elegidos por la asamblea los que permanezcan en la escuela: se adscribe el centro al Patronato de Suburbios, que tiene la potestad de proponer maestros para sus centros debido a las especiales características de estos.

En abril comienza la construcción de la escuela definitiva, que estará terminada para septiembre.

A la vez, comienza el trabajo de preparación del curso siguiente. Se inicia el proceso de matriculación con notable éxito; se van incorporando una serie de maestros voluntarios, algunos provenientes de la asamblea de interinos y parados, otros con plaza fija y experiencia contrastada, que se integran en el proyecto y que comienzan a preparar la puesta en marcha de

la nueva escuela; se inician las gestiones para su nombramiento a través del Patronato de Suburbios

En esta primera fase han quedado claras una serie de cuestiones: Es el poder de la asamblea la que ha logrado imponer sus condiciones; las negociaciones solamente pueden tener éxito si van acompañadas de acciones de fuerza que contrarresten el poder de las instituciones; el principal caballo de batalla está en el control de la escuela y es la propia asamblea la que debe tener este control para poder tener la escuela que quiere.

Por otro lado, se va concretando el modelo de escuela que se pretende : gratuita, gestionada por padres, maestros y alumnos, con participación activa de estos, con unos contenidos de acuerdo con la realidad del barrio, con unas condiciones dignas, dotada de parvulario y guardería, y ligada a los intereses del propio barrio.

### *Escuelas en lucha*

La escuela está terminada para el comienzo del nuevo curso y el Ministerio comienza el nombramiento de maestros al margen de las decisiones de la escuela. Se ha dado cuenta de cuál es el verdadero núcleo de la lucha, el control de la escuela por los propios interesados y no está dispuesto a ceder ni siquiera bajo la figura jurídica del régimen especial que supone el Patronato de Suburbios. Además, otras escuelas como la escuela Pegaso, en los barrios de Sant Andreu y Sagrera y la escuela Ferrer i Guàrdia, en Ciudad Meridiana, plantean el mismo problema. A partir de este momento, se forma la coordinadora de Escuelas en Lucha y el conflicto adquiere unas dimensiones mucho mayores. En los meses de septiembre y octubre se viven los momentos cumbre de la lucha. La prensa se hace eco casi a diario de la problemática planteada y los organismos oficiales se ven obligados a intervenir dada la trascendencia de los acontecimientos.

El seis de septiembre, trescientas personas entre padres, alumnos, vecinos y profesores de las escuelas Sóller y Pegaso se presentan en la sede de la Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia de Barcelona con el objetivo de negociar los nombramientos de maestros propuestos por las respectivas asambleas y exigir la retirada de los nombramientos realizados por aquella. Puertas cerradas y negativa al diálogo provocan la ocupación del edificio por



parte de los concentrados. El encierro durará cuatro días hasta ser desalojados por la policía al mediodía del sábado día diez. Durante este tiempo, se suceden las muestras de solidaridad por parte de escuelas, agrupaciones políticas y parlamentarios electos. Las manifestaciones en los barrios se suceden, pero las negociaciones con el Delegado de Educación no producen ningún resultado. La mediación de algunos parlamentarios consigue la promesa de una entrevista con el Gobernador Civil, señor Belloch, para la siguiente semana.

La intervención del gobernador no produce ningún cambio substancial en la postura de Delegación del MEC, y las asambleas, a las que se han unido la escuela Ferrer i Guardia y el Patronato Ribas, deciden ocupar las escuelas y comenzar las clases el 19 de septiembre. Asambleas y manifestaciones en los barrios al final de la jornada escolar acaban con una concentración con intento de ocupación de la Delegación del Ministerio, el día 23, que acaba con una carga policial.

La respuesta es inmediata: el día siguiente, festividad de la Mercé, patrona de la ciudad, las escuelas se trasladan masivamente al Ayuntamiento, entrando en él y ocupando el vestíbulo hasta conseguir que el Alcalde, señor Socías, negocie directamente con la asamblea de concentrados y se comprometa a conseguir una entrevista con el Gobernador. Al intentar permanecer en el ayuntamiento, mientras se celebra dicha entrevista, son desalojados por la policía y se concentran frente al Gobierno Civil. Se consigue una entrevista con el Ministro de Educación, Sr. Íñigo, Cavero a la que asisten seis representantes de las escuelas y el propio Alcalde con el primer Teniente de Alcalde y la Delegada de Cultura. La entrevista, que no obtiene ningún resultado por la negativa tajante del ministro a negociar los contratos de los maestros, se celebra el 28 de septiembre mientras las escuelas permanecen concentradas en el aeropuerto de Barcelona a la espera de resultados.

El uno de octubre, mientras las escuelas son ocupadas por la Policía Nacional, una masiva concentración frente a la Delegación del MEC es disuelta violentamente con tanquetas de agua por la policía, produciendo varios contusionados y un detenido. Mojados y apaleados, se dirigen al Parlament de Catalunya en el que consiguen entrar y realizar una asamblea para valorar la situación. En ella se interpela a los parlamentarios que continuaban en el edificio y se consigue que gestionen y participen con los representantes de las escuelas una entrevista con el Gobernador, en la que se solicita la libertad del detenido, la retirada de la

policía de los barrios y la contratación de los maestros. Se mantiene la ocupación del Parlament hasta que a las diez de la noche llega la respuesta. Los dos primeros puntos se consiguen y queda el punto central de la lucha para una nueva negociación con el Ministro, eso sí, esta vez la comisión la formarán solamente representantes del Ayuntamiento y el grupo de parlamentarios que forman la Comisión de Enseñanza.

Las asambleas de los centros deciden darse un compás de espera y continuar las clases como se venía haciendo desde el comienzo de curso en espera de los resultados de las negociaciones.

Mientras tanto, comienzan las reacciones contra el movimiento de Escuelas en Lucha: la Asociación Nacional de Profesorado Estatal convoca y realiza una huelga los días 14 y 15 de octubre, con desigual resultado y fuerte movimiento en contra, por parte de asociaciones del profesorado y sindicatos, pero cuyo seguimiento la Delegación del Ministerio amplía al ochenta por ciento del profesorado de Barcelona, por encima de los propios datos de los convocantes. Es también el momento en el que una parte de la prensa toma partido claramente en contra del movimiento.

Finalmente, el día 21 de octubre de 1977 llega la respuesta del ministerio vía comisión de enseñanza de los parlamentarios catalanes: se consiguen todos los nombramientos para las escuelas Sóller y Ferrer i Guardia, con efectos del uno de septiembre; la escuela Pegaso conseguirá parcialmente los objetivos meses después: 37 contratos firmados en septiembre de 1978 con efectos desde enero.

El éxito de la lucha ha sido importante: se ha conseguido implicar a instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona y la asamblea de Parlamentarios en una lucha que, por supuesto, no era la suya; El Ministerio de Educación se ha visto obligado a aceptar una solución que siempre había rechazado y se han creado las bases para construir una escuela diferente al servicio de la clase trabajadora, gestionada por los propios interesados, con un número razonable de alumnos por aula, con un profesorado implicado en la renovación de la educación y que defiende la gratuidad total. Y todo esto gracias a una lucha en la que el peso predominante lo ha llevado la asamblea, en la que la reflexión ha sido permanente y la acción siempre ha ido de la mano con la negociación, en la que la resistencia ante las negativas y la reacción inmediata ante las agresiones han sido una constante.

Pero no todas las lecturas del proceso son unánimes: mientras en las escuelas se hace este análisis, es la propia comisión de parlamentarios que han negociado el acuerdo la que nos pone sobre-aviso de lo que va a pasar en el futuro: “Es una SOLUCIÓN EXTRAORDINARIA a un conflicto EXTRAORDINARIO y que una buena Administración no ha de permitir que se vuelva a repetir” (es cita textual de su comunicado y las mayúsculas son suyas). En otras palabras, una administración democrática no ha de permitir este tipo de experiencias. Los políticos no ven en esta lucha una aportación a la mejora de la enseñanza sino un problema heredado de la situación política anterior. Luchar por una escuela en un barrio es encomiable y hasta merece un premio, los contratos, pero soñar con una escuela diferente ya no está tan claro.

La experiencia de la Escuela Sóller durará dos cursos: en septiembre de 1979 los maestros que han resistido serán nombrados de oficio en centros de la provincia lo más distantes posibles unos de otros.

### *Iniciando una experiencia*

Durante estos dos años los esfuerzos para dotar de contenido a la escuela son enormes por parte de todos.

La escuela se va dotando de un sistema de funcionamiento participativo y horizontal basado en la experiencia de la lucha, donde la asamblea ha sido el elemento motor. Se prescinde de la figura del director y es la asamblea el organismo decisorio del que parten una serie de comisiones de funcionamiento en las que participan padres, maestros y alumnos de segunda etapa. El claustro de profesores asume las funciones pedagógicas, pero tanto los problemas que surgen en las clases como la didáctica aplicada se tratan de manera abierta ya sea en la asamblea o en las reuniones de padres por clases o ciclos y en las propias comisiones.

Las comisiones de trabajo son el verdadero motor de la escuela. A las comisiones de Mantenimiento, Economía, Comedor, Extensión pedagógica, talleres y personal se unirá más tarde la comisión de Orden y Pedagogía, que asumirá el reto de potenciar el debate a fondo sobre la verdadera función de la escuela.

## La lucha de la escuela Soller

La participación de los alumnos se articula a diferentes niveles de implicación en función de su edad; así, mientras en los primeros cursos se potencia la participación en las decisiones que afectan a la propia clase a través de asambleas, los alumnos de segunda etapa elaboran sus propuestas en asambleas de clase y las defienden mediante sus propias publicaciones y participando en las asambleas y comisiones del Centro.

En estos dos años se inicia toda una serie de tareas y logros que, por desgracia, en muchos casos no tendrán continuidad y que, dada la extensión de este trabajo, me limitaré a enumerar:

Inicio de un verdadero trabajo de renovación pedagógica adaptada al barrio. Se trata de una pedagogía activa que tiene en cuenta el estudio del entorno: salidas por el barrio, y la ciudad, colonias escolares; con bibliotecas de aula y material didáctico elaborado por el centro.

Elaboración y revisión constante de nuevas programaciones mediante coordinaciones de nivel, etapa y departamento con informes y valoraciones exhaustivos.

Introducción del aprendizaje de la lengua catalana a todos los niveles: se consigue utilizar el catalán como lengua vehicular para los alumnos catalanoparlantes hasta segundo de básica, se dan clases de catalán en el resto de los cursos y también para padres y vecinos; se realizan clases de reciclaje de catalán para maestros de toda la zona.

Se consigue de la delegación del Ministerio aulas de parvulario de tres años.

Se crea la Escuela de Adultos ligada al centro como escuela de padres y de conexión con el resto de vecinos del barrio.

Se realizan charlas, debates, cineforums, excursiones familiares, clases de expresión corporal, seminarios de psicología y de alimentación.

Se realiza una importante campaña de difusión de la experiencia dentro y fuera de Catalunya y de coordinación con otros centros.

La escuela colabora con las diferentes actividades del barrio, participando en las fiestas populares y abriendo sus instalaciones a actividades deportivas, actividades con niños con deficiencias, trabajo con la juventud del barrio.

Se consigue que el personal no docente se integre en la dinámica del centro mediante la contratación, por parte del Ayuntamiento, de madres y de vecinos en paro para las tareas de limpieza y comedor.

### *Hacia un final no deseado*

Todo este trabajo, al que evidentemente le faltó tiempo para consolidarse, supuso un gran desgaste tanto físico como mental, que, unido a las dificultades propias de la situación, como deficiencias en la escolarización previa de muchos alumnos, desestructuración social, o problemas de delincuencia en el entorno, contribuyeron a crear un creciente malestar entre un grupo de padres, que, junto con algunos partidos de izquierda de la zona, comenzaron una campaña de desprestigio de la escuela, que acabaría en una honda división entre los propios padres.

La convocatoria de dos huelgas diferentes en los meses de febrero y mayo de 1978 supuso una división entre el movimiento de maestros: la primera promovida por PNN y maestros interinos por el contrato laboral y el boicot a las oposiciones, que fue seguida unánimemente por la escuela; la segunda, promovida desde las centrales sindicales en la que participaron únicamente cuatro personas que en ese momento estaban afiliadas. Ello contribuyó a crear fuertes disensiones entre el claustro y estas cuatro personas.

Esta división produjo un fuerte debate sobre el modelo organizativo del centro que derivó, por parte de un sector de padres, en la solicitud del nombramiento de un director, la salida de todas las plazas de maestros a concurso para hacer un claustro “más pluralista”, y la solicitud de legalización de una asociación de padres que se había creado bajo los auspicios de una asociación de vecinos de un barrio colindante.

Una campaña de prensa muy agresiva y la legalización por parte de Gobernación de la Asociación de Padres adelantan el final de la experiencia: la asociación pacta con Delegación el desplazamiento de los profesores del centro, excepto las cuatro personas antes citadas, que se habían puesto a su favor, y el nombramiento de un director por parte de Delegación ajeno al centro. Era septiembre de 1979.

## La lucha de la escuela Soller

La continuación de la historia está escrita por otros protagonistas, pero se tiene constancia de ello.

## LA IZQUIERDA EN LOS MOVIMIENTOS UNIVERSITARIOS<sup>1</sup>

Tania FERRE CARRIÓN

### **Resumen:**

La comunicación que propongo abordara el periodo comprendido entre el tardofranquismo y la transición. Analizará el papel que desarrollo la izquierda en los diferentes sectores de la sociedad, deteniéndome en el análisis de los movimientos universitarios. Centraré el objeto de estudio en el movimiento que surgió a principios de los años setenta por parte de los profesores no numerarios (PNN) y la vinculación que estos tuvieron con los partidos de izquierdas – PCE y PSUC- , tanto desde la perspectiva de la militancia y cultura política como la recepción que tuvo el movimiento en otras organizaciones.

**Tania Ferre Carrión** es doctoranda adscrita al Programa de Doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. La comunicación se inscribe en el proyecto I+D «Las izquierdas, el poder local y la difusión de valores democráticos en la Andalucía rural», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref.: HAR2013-47779- C3-2- P) y a una de las líneas de investigación sujetas a la elaboración de mi Tesis Doctoral: El movimiento de PNN en España, dirigida por Alberto Carrillo Linares

---

Este trabajo se ha realizado en el ámbito del Grupo de Investigación «Estudios del Tiempo Presente» (PAI HUM-756) y del Centro de Investigación «Comunicación y Sociedad» de la Universidad de Almería (CySoc), y forma parte del proyecto I+D «Las izquierdas, el poder local y la difusión de valores democráticos en la Andalucía rural», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref.: HAR2013-47779- C3-2- P).

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017

### *Introducción*

En este texto voy a abordar el periodo comprendido entre el tardofranquismo y la transición. Analizando el papel que desarrolló la izquierda en los diferentes sectores de la sociedad, deteniéndome especialmente en el análisis de los movimientos universitarios. Centraré el objeto de estudio en el movimiento que surgió a principios de los años setenta por parte de los profesores no numerarios (PNN) y la vinculación que estos tuvieron con los partidos de izquierdas – PCE y PSUC- tanto desde la perspectiva de la militancia y cultura política como la recepción que tuvo el movimiento en otras, al igual que la vinculación que existió entre los diferentes movimientos del momento. La hipótesis de partida es cuestionar si el movimiento de PNN fue un movimiento social o si por lo contrario fue un movimiento coyuntural e interesado por parte de algunos de sus miembros para conseguir poder político.

Antes de nada, hacer una breve introducción a la historia de los movimientos sociales. Como es bien sabido, los primeros antecedentes sobre la teoría de los movimientos sociales aparecen a mediados del siglo XIX y principios del XX con el marxismo clásico (Marx). Juntos con algunos sociólogos que trataron el tema de forma indirecta como Durkheim y Weber. Las teorías acerca de los movimientos sociales que se han ido produciendo a lo largo del siglo XX han tenido en cuenta los diferentes contextos históricos, centrándose en diferentes elementos y factores según el tipo de movimiento social que se esté analizando. Por ejemplo, para explicar el movimiento obrero se recurre a relacionarlo con los cambios estructurales y se concibe como una lucha por controlar el poder y la producción.

Será en los años sesenta cuando aparezcan nuevas teorías, como la teoría de la movilización de recursos y la teoría sobre los nuevos movimientos sociales. En esta última enmarcaremos todos los movimientos que surgen a partir de los años sesenta, incluyendo el Movimiento de los profesores no numerarios. Para Fernández Buey y Jorge Riechmann los movimientos sociales son agentes que intervienen en el proceso de transformación social, ya sea promoviendo los cambios u oponiéndose a ellos. Algunos de los NMS serían: el feminismo, el ecologismo, el movimiento hippie... Una de las teorías dentro de las que se enmarcaría el estudio de los movimientos sociales, es la teoría de la acción colectiva, se trata



de una formación de “redes de reciprocidad, cooperación voluntaria y compromiso” En torno a la pertenencia de ciertos movimientos sociales y sus características encontramos un debate entre diferentes autores. Para Boaventura de Sousa Santos los Nuevos Movimientos Sociales constituyen “tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social (...) Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción” . Mientras que para Carrillo-Linares, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, incorporados de forma general a la teoría de los nuevos movimientos sociales, sería de dudosa pertenencia a este grupo dado el alto carácter político que los envuelve. Bajo la visión de este último autor, de igual forma deberíamos de dudar sobre la pertenencia del Movimiento de PNN a este grupo, ya que, al igual o incluso en mayor medida que los estudiantes, el movimiento de profesores no numerario será un movimiento con una fuerte carga política. Sin embargo, también tenemos aquellos que defienden que los movimientos sociales son movimientos puramente políticos, siendo ésta una de las principales características de los movimientos sociales. junto con la fuerte politización de estos, que estaban en su mayoría movidos y organizados por el Partido Comunista. Para concluir con la definición de los movimientos sociales me voy a centrar en las conclusiones que he sacado a raíz Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey. Los movimientos sociales son aquellos movimientos que tienen como finalidad cambiar algún aspecto social; estos tienden a buscar el apoyo del colectivo más allá del grupo al que se dirija; son un grupo definido y suelen estar enfocados de tal forma que reúnan reivindicaciones a un nivel más general, junto con las reivindicaciones propias del movimiento social. ¿Es el movimiento de PNN un movimiento social?

### *Los partidos de izquierdas y la movilización de universidades*

Los primeros agentes politizados dentro de las universidades franquistas serán los estudiantes que comenzarán a movilizarse a mediados de los sesenta. Según cita Carrillo Linares existían diferentes tipos de estudiante, un primer grupo en el cual estarían todos los estudiantes militantes de alguna organización política, siendo estos una minoría, no llegando apenas al 5% de los estudiantes, el cual ha sido denominado el núcleo duro; el segundo grupo

serían todos aquellos estudiantes que tienen contacto con las organizaciones políticas y que pueden llegar a ser militantes; a este grupo se le ha denominado el grupo elástico; y un tercer grupo que incluye a aquellos estudiantes que participan en las movilizaciones sin saber tan siquiera quien hace los llamamientos u organiza las movilizaciones, muchos de ellos no tenían ninguna conciencia política e incluso rechazaban la política pero sus intereses eran los mismos que la del resto de estudiantes, a este grupo se le denomina el flotador amortiguador. El movimiento estudiantil está reconocido como uno de los movimientos sociales más importante de los últimos años del franquismo junto con el movimiento vecinal y el movimiento obrero. Contribuyeron de forma muy directa al desgaste del régimen, sin el cual hubiera sido “imposible” acabar con él. Alberto Carrillo Linares señala que fueron “las movilizaciones y la agitación que pusieron en jaque a la dictadura”. Los historiadores sociales defienden que las movilizaciones sociales fueron uno de los factores más relevantes en el fin del régimen, ya que consiguieron desestabilizarlo y ponerlo contra la pared ante la batalla por la democratización. Pero detrás de todo ello hay una serie de organizaciones clandestinas antifranquistas de izquierdas; una de las que más activamente se movió para hacer posible todo esto fue el PCE, sobre todo en los años cincuenta y sesenta en los que los militantes eran tanto obreros como estudiantes. En un primer momento se encargó de organizar el movimiento obrero para más tarde organizar el movimiento estudiantil, aunque más tarde éste comenzara a fragmentarse e irán apareciendo grupúsculos de izquierdas y de extrema izquierda. Podría decir que los autores que estudian el movimiento estudiantil ponen como factor clave la ruptura generacional y la masiva llegada de estudiantes a las universidades, provocada por la coyuntura económica y el desarrollismo que se dio a lo largo de los años sesenta. Estos nuevos estudiantes de clase media, junto con la incorporación de las mujeres, van a ser los que doten a la universidad de una gran diversidad, que va a fomentar la llegada de las nuevas ideas, las cuales se expandirán hasta producir una transformación en su composición social. Elena Hernández Sandoica, Miguel Ruiz Carnicer y Marc Baldó Lacomba señalan que esto provocó una inyección social, repercutiendo activamente en el movimiento estudiantil español, dinamizándolo y radicalizándolo. El planteamiento que hace Alberto Carrillo-Linares acerca del componente social y cultural que tiene el movimiento estudiantil antes que político es más interesante y se acerca más a la línea de historia social

que aquellos que plantean el movimiento como un movimiento meramente político. Como plantea este autor, coincidiendo en ello con otros autores, los estudiantes necesitan romper con toda la tradición que supone el régimen franquista; llegan aires de otros países, sobre todo a partir de la ley de prensa de 1966, que influirán en los jóvenes españoles. “Fue forjando una Cultura transgresora alternativa a la ofrecida por el franquismo y, dentro de ésta, una cultura política”, vemos en esta afirmación cómo se pasó primero por un cambio de carácter social que influiría en la creación de una nueva cultura política. Esto va estrechamente ligado a la ruptura generacional; los hijos e hijas de las familias que apoyan al régimen van a querer romper con toda esta tradición, ya que no es una tradición que ellos hayan vivido: no eran hijos de la guerra. La idea de ruptura generacional la encontramos prácticamente en todos los trabajos sobre el movimiento estudiantil como uno de los elementos fundamentales para su comprensión. El movimiento estudiantil va a incorporar unos nuevos valores ideológicos y culturales que llevarán a numerosas reivindicaciones durante la transición. Por lo tanto, podría decirse que son los estudiantes los que de alguna manera traerán el cambio social y cultural que necesitaba la transición para llegar a buen puerto.

La movilización social y política va a alcanzar a otros sectores de la sociedad más allá del movimiento obrero y estudiantil con la aparición del movimiento vecinal y los movimientos de sectores profesionales (médicos, abogados, arquitectos... ). Centrándonos en el objeto de estudio, la Universidad, nos encontramos con que se va a mantener abierta la lucha antifranquista hasta el final del régimen, uniéndose al movimiento estudiantil el movimiento de profesores no numerarios y el movimiento del personal no docente de la universidad. Es en estos momentos cuando el movimiento de PNN aparece como tal pero ¿qué va a ocurrir para que los profesores no numerarios dejen sólo de dar apoyo al movimiento estudiantil y comiencen su propia lucha contra el régimen franquista? Desde el punto de vista administrativo, habría que fijar la Ley General de Educación de 1970, aprobada en agosto del mismo año, como el momento de cambio y en el que comienza a organizarse el profesorado hasta que en 1972 se realiza la primera asamblea estatal de PNN en Granada con la representación de 77 Profesores No Numerarios de todo el estado. La ley fue rechazada tanto por los estudiantes como por el profesorado; el profesorado no numerario se ve marginado en esta reforma educativa ya que en la Ley no especifica el tipo de contrato que

van a tener estos profesores ni la remuneración salarial que van a obtener, por lo que van a seguir bajo las mismas condiciones salariales y de contratación, es decir continuar bajo la precariedad laboral mantenida hasta el momento. Con todo, no será la Universidad el único foco de protesta contra la LGE, sino que va a afectar a todo el sistema educativo. Será por lo tanto la aprobación de esta ley la que impulse a un nuevo periodo de protesta acusando a esta reforma como un mero producto capitalista.

Otro aspecto a resaltar es el cambio que experimenta el PCE a principios de los 70; debido al gran aumento de militancia, su organización tiene que ser modificada y su nivel de actuación también. El PCE, que había sido hasta el momento el partido antifranquista encargado de la organización de la movilización obrera y universitaria, entrada la década de los setenta aumentó su militancia, llegando a otros sectores sociales y profesionales y creándose nuevos movimientos: el movimiento vecinal, como uno de los más característicos. Metiéndose el PCE hasta en la última rendija de la vida de los militantes, convirtiéndose en un partido de masas. La organización comenzó a hacerse de forma horizontal a través de los comités territoriales. El profesor Martín Ramos nos aclara durante su entrevista la organización que había dentro del ámbito universitario, en el PSUC: *“En el ámbito del PSUC había existido un comité de estudiantes y una organización de profesores diferenciada, pero son distintas a la dirección; la organización iba por separado, pero el comité era universitario.”* Es fácil encontrar la relación entre el movimiento estudiantil y el movimiento de PNN: aquellos estudiantes militantes del PCE o el PSUC que llegaban a ser contratados por las universidades eran los profesores que protagonizaban el movimiento de PNN. Fernández Buey nos afirma la conexión entre los PNN y el PCE o PSUC: *“la gran mayoría de los profesores no numerarios que formaron parte de las coordinaciones estatales y de las comisiones de negociación con el Ministerio, en nombre del movimiento, estaban afiliados por entonces al PCE, al PSUC”*.

Respecto a las reivindicaciones sociales, debemos de recordar las ideas que el PCE quería llevar a cabo en el momento que comienza a movilizar el tejido social, a partir de los años 50. Todo ello viene a raíz del “cambio táctico” que los comunistas toman a partir de 1948: para ello era necesario movilizar al proletariado como una fuerza de masas; fijando la declaración Por la reconciliación nacional como un momento importante en la estrategia

comunista, intentando tras ésta construir una ideología en torno a la realidad social del momento, siendo de vital importancia las directrices que toman para lograr ser el partido que encabece la movilización antifranquista, con el objetivo de abarcar un movimiento de masas que se apoyen entre sí; esto también se recoge en las características propias de un movimiento social: la capacidad de dar apoyo a otras reivindicaciones sociales. ¿Y donde encontramos el punto de conexión entre el movimiento de PNN y las organizaciones políticas antifranquistas? Quizá la forma más sencilla de verlo se encuentra en los diferentes mensajes y comunicados que va a lanzar la organización de PNN, en los que podemos ver el carácter de la izquierda detrás: anticapitalismo, democracia, denuncia del clasismo... son palabras propias del discurso de la izquierda antifranquista. La politización de la sociedad franquista era un hecho y los “subversivos” estaban en las universidades, según afirmaban los propios ministros franquistas. En estos pequeños espacios de libertad, donde quedaba un resquicio para la democracia, la política y la discusión; una perspectiva de sociedad nueva, por la que van a seguir luchando tanto los estudiantes como los PNN.

Tras la muerte de Franco el conflicto social y político no disminuyó sino todo lo contrario: los conflictos en España durante los años posteriores a esta fecha se dispararon, recogiendo en 1976 las cifras más altas de todo el periodo franquista. Las diferentes organizaciones de la izquierda antifranquista habían llamado, desde finales de 1975, a la máxima movilización social para alcanzar la deseada democracia. Fue Barcelona uno de los principales focos de conflictividad con los que topó el gobierno de Arias. La lucha no estaba perdida, era el momento de echarse a la calle en busca de lo que llevaban años pidiendo: libertad política y democratización del país. La opción de la continuidad del régimen estaba ya desechada por una parte de las elites políticas; la disyuntiva estaba en cómo llegar hasta la democratización: a través de la ruptura o de la reforma pactada. cómo el movimiento de PNN continúa con su lucha reivindicativa laboral hasta 1982 —que es cuando vuelve a resurgir, levemente, hasta su definitiva desaparición en 1986—. El movimiento de profesores no numerarios decayó tras la gran huelga de 1975: esto es un hecho que reconocen tres antiguos PNN —Fernández Buey, J. L. Martín Ramos y Guillermo Lusa—. Aunque las reivindicaciones laborales continuarán durante dos años más, la Universidad no quedaría paralizada, ni se producirían huelgas por parte de los PNN. El cambio político de estos años

hizo que estos profesores estuvieran a la espera de que su situación mejorara y se aceptara el contrato laboral. Los profesores expulsados de la Universidad fueron readmitidos, e incluso los que estaban en el exilio volvieron. La universidad se convirtió durante estos años en una zona de libertad donde la represión política, que aún existía, no llegaba. Una de las características importantes de este inmovilismo por parte de los PNN, según mi forma de interpretar las fuentes, fue la marcha de muchos de ellos a la dirección de los partidos políticos, sobre todo del PSOE. Creo que esto les dio cierta expectativa a los que quedaron en la Universidad, que aún eran muchos, el 70% en 1982, de una reforma educativa acorde tanto con las reivindicaciones sociales como laborales. Pero esto no fue así, como el profesor Guillermo Lusa manifestó en su entrevista: *“cuando gana el PSOE en 1982, me acuerdo que fuimos los representantes de Barcelona a hablar con Alfredo Pérez Rubalcaba, que había sido miembro de nuestra coordinadora, y entonces le decíamos: bueno ahora es el momento de aplicar nuestras plataformas, nuestro modelo alternativo de Universidad. Pero él nos confesó, en aquella primera reunión, que no se habían atrevido a declarar extinguir (sic) a los funcionarios, y entonces se inventaron una coña marinera: lo del funcionario de nuevo tipo.”* No existió una ruptura que provocara el cambio necesario para una Universidad diferente a la franquista, pero tampoco parece que se quisiera dar ese paso hacia un modelo de educación crítico. En 1983 se aprueba la Ley de Reforma Universitaria (LRU), y fue justo unos meses antes de hacerse pública la ley cuando se reactivó la coordinadora estatal de no numerarios, conformándose la X Asamblea de profesores no numerarios en abril de ese mismo año.

Fernández Buey nos hace una síntesis, bastante extensa, sobre las resoluciones que se tomaron en aquella asamblea, en la cual no me detendré demasiado. Entre ellas, el rechazo absoluto al sistema de oposiciones, proponiendo, de nuevo, que la única relación que existiera entre los profesores y la Universidad fuera de carácter contractual. Los catedráticos y funcionarios fueron esta vez los que se pronunciaron contra el contrato laboral como única vía de contratación; hubo una serie de huelgas tras la X asamblea de los no numerarios pero no tuvieron ninguna repercusión. Finalmente, tras la aprobación en agosto de ese año, se convocaron las pruebas de idoneidad para poder acceder a la plaza de funcionario. Aún así continuó existiendo PNN porque se siguieron abriendo en las que la mayoría del profesorado

era contratado, pero ya no era ese profesorado que había luchado en la larga huelga; aunque también hicieron sus reivindicaciones, éstas serían siempre de carácter laboral y no trascenderían. Fernández Buey afirma que hay una gran cantidad de documentación sobre este periodo, pero aún está sin contrastar y sin analizar. Será en este momento en el que la idoneidad y la inserción de los profesores no numerarios, que habían luchado durante la huelga de 1975, dentro de la escala de funcionariado acaben definitivamente con el movimiento de PNN.